

# DOCUMENTO POLÍTICO ORGANIZATIVO

## XIV ASAMBLEA IU ARAGÓN

### Desplegando la izquierda como palanca de acción y transformación social

Celebramos nuestra anterior asamblea en medio aún de la pandemia de COVID-19, de la que salimos con una clara evidencia de las carencias estructurales del actual sistema económico derivadas de un desmantelamiento progresivo del estado del bienestar, característica esencial del neoliberalismo. La realidad nos impuso el reconocimiento sin paliativos de la absoluta interdependencia que tenemos los seres humanos, entre nosotros y con nuestro entorno ambiental, y de la profunda crisis ecosocial que el capitalismo ha ido construyendo a conciencia durante nuestra historia reciente. Otra de las conclusiones que nos dejó es que, sin un estado fuerte donde la gestión de sus recursos esté bajo la administración pública, por lo que apostamos desde IU, es imposible asumir crisis como las que hemos sufrido recientemente, tanto climática como energética.

Esto se ha olvidado y asistimos a la reconfiguración del orden mundial. Vivimos el ascenso de una decidida agenda global ultraliberal y fascistizada con EEUU y Europa a la cabeza, que enmarca una política neoimperialista de dominación y explotación territorial y comercial que tensa las costuras del sistema en otra vuelta de espiral. El objetivo último de esta hoja de ruta es establecer sociedades más autoritarias que preparen el camino para una explotación más intensa de la fuerza de trabajo y de los recursos naturales que permita a los capitalistas seguir manteniendo sus beneficios en medio de una profunda crisis ecosocial. Forma parte de esta misma estrategia el disciplinamiento de la población para participar o aceptar el aumento del militarismo y los conflictos entre potencias capitalistas. Mientras en el mundo globalizado están cambiando las potencias hegemónicas, occidente apuesta por una OTAN revitalizada como instrumento de esta dominación.

Esta nueva realidad se ha ido imponiendo de forma progresiva, hasta el punto en que desde octubre de 2023 -sin contar las décadas de ocupación colonial, apartheid y vulneración sistemática de derechos humanos- estamos asistiendo al brutal genocidio del pueblo palestino perpetrado por el sionismo israelí, en directo y sin que la comunidad internacional ni, dentro de ella, Europa, tengan voluntad real de impedirlo.

A pesar de que la sociedad en masa está clamando por los derechos del pueblo palestino mientras contempla horrorizada el genocidio y la hambruna planificados al detalle, no se están aplicando sanciones reales y contundentes. Para nuestra absoluta vergüenza como ciudadanía europea, vemos cómo ni se rompen relaciones con el estado de Israel, ni se aplica de forma efectiva el derecho internacional para parar el genocidio, en primer término, y facilitar, inmediatamente después, el derecho a la descolonización del pueblo palestino.

La industria de la guerra es consustancial al metabolismo capitalista, y más en esta fase de nueva acumulación sobre límites biofísicos en vías de claro agotamiento, donde se compite por los recursos estratégicos. Y se concreta en el total sometimiento de Europa a los intereses estadounidenses y en una falta de soberanía palmaria. Europa abraza el relato de la falsa seguridad para justificar su rendición al negocio de la guerra a través de un aumento insostenible del gasto público en armamento, y se rinde a un control férreo de los mercados a través de la sumisión a la política arancelaria de Trump.

Aunque España haya ofrecido algún tipo de resistencia a este sometimiento con una insuficiente finta para esquivar el compromiso del 5%, nos rendimos tanto al aumento del gasto público al 2% como a la política arancelaria, para financiar directamente los intereses de EEUU. Con esta actitud estamos perdiendo además la oportunidad de reforzar el multilateralismo y la posibilidad de construir, junto con otros países, tanto una salida posible a esta situación geopolítica impuesta, como un frente eficaz contra el avance del fascismo. En consecuencia, las tensiones y contradicciones que sufre nuestra organización dentro del gobierno de coalición son graves y hay que plantearlas desde la base y con un debate honesto.

También hemos enfrentado otras contradicciones en el seno del gobierno, como el giro en la postura con Marruecos y el Sáhara, la masacre de Melilla, el mantenimiento de la ley mordaza o los casos de corrupción sistémica que van aflorando sin pausa, entre otras.

En nuestro país hemos vivido estos años el ascenso de una extrema derecha con características fascistas en su doble cara, un PP recuperando voto en las municipales y autonómicas de 2023 con un relato y una agenda cada vez más reaccionaria, y su “cara b”, que actúa a fascismo descubierto, conquistando voto y relato en las capas populares con el discurso del machismo, el odio, el racismo y la xenofobia, disfrazado de antisistema. Debemos trabajar con ahínco por una movilización ciudadana de contestación a estos discursos de odio que sea ofensiva y propositiva además de reactiva.

Por otro lado, el camino de conformación de espacios de unidad no es ni ha sido fácil, tampoco dentro de la coalición Sumar. A las dificultades de la verticalidad en la toma de decisiones y de procedimientos poco democráticos, se suma la salida de Podemos y su actitud de continuo enfrentamiento y competencia con el espacio de la coalición. Con todo, siempre hemos aportado vocación de unidad, generosidad y nuestro valor político en el buen funcionamiento de estos espacios.

En Aragón, nuestro proceso interno de debate sobre alianzas ha sido provechoso, y la organización ha salido reforzada y cohesionada para seguir trabajando la unidad desde el respeto a los demás agentes, el reconocimiento de la diversidad y una metodología radicalmente democrática para caminar juntos y juntas hacia objetivos que son comunes.

Dentro del gobierno de coalición se han conseguido avances importantes para la mayoría social: la aplicación del escudo social en pandemia; las leyes sobre memoria democrática, cambio climático o eutanasia; la reforma laboral; las sucesivas subidas del SMI; la ley del “Solo sí es sí”; la recuperación del diálogo con Cataluña y ley de amnistía; la ley de vivienda; la reforma del art.35 de la Ley de Extranjería y una defensa firme de la migración como riqueza social, cultural y económica en nuestro país; así como otros avances legislativos que permiten transmitir a la ciudadanía no solo que es posible mejorar los datos

económicos, laborales y sociales con gobiernos en los que obligamos a la socialdemocracia a hacer políticas de izquierda, sino que sólo estas políticas mejoran la vida de la gente. No debemos caer en la autocomplacencia, y siendo verdad lo que se ha conseguido, es fundamental reflexionar sobre por qué estas medidas no llegan a la juventud, pensionistas y a la clase trabajadora.

Sin embargo, se quedan en el tintero muchos de los puntos del acuerdo de gobierno, y seguimos constatando que son avances insuficientes. La desigualdad, la falta de acceso a la vivienda y a empleos de calidad, la privatización de los servicios públicos y el negocio con los derechos básicos sigue cebándose en la gente más vulnerable y en la clase trabajadora.

Esto es así porque el capitalismo no es reformable ni sostenible sobre meros avances o mejoras, sino que es imprescindible su superación y la arquitectura de un nuevo paradigma económico, ambiental y social que se sostenga sobre un enfoque feminista, socialista, ecologista, antimilitarista, es decir, sin relaciones desiguales de poder, que sea decrecentista y de paz.

El riesgo de involución machista comprende todo un paraguas patriarcal y autoritario de discursos de odio y de ataque a derechos fundamentales, y lo estamos confrontando a diario con una fuerte red feminista, activa y combativa. Los movimientos feminista y LGTBIQ+ son palancas importantes de lucha contra este sistema generador de violencias.

Merecen especial mención tanto la absoluta tragedia de la DANA en Valencia y otras zonas del territorio, como la terrible oleada de incendios incontrolables en numerosos puntos del país durante este verano. Es la clara evidencia de que el cambio climático está inserto en nuestra vida diaria y sus consecuencias son y serán nefastas si no actuamos. La inmensa vergüenza de un PP que además de incompetente, no solo no asume responsabilidades sino que se abraza al discurso negacionista y a la confrontación constante, es la enésima prueba de que no hay una alternativa política creíble ni viable en España en la derecha.

Esta acción política irresponsable está alimentando el descrédito de las instituciones y el socavamiento de la democracia, alentando las opciones ultras a través del agotamiento y la frustración de la ciudadanía. Frente a este modelo autoritario y centralista, debemos avanzar de manera decidida en federalidad y cogobernanza, con una defensa férrea de un marco institucional que sea útil y esté al servicio de la ciudadanía.

A pesar de los problemas de corrupción en el PSOE y de la práctica constante del lawfare por parte de la derecha, la situación de callejón sin salida del PP se ha demostrado en los intentos fallidos de tejer una mayoría alternativa. Un continuo discurso de bulos, de acoso y agresividad ha facilitado el sostenimiento de los cada vez más frágiles puentes que tiende el gobierno de coalición con el resto de fuerzas, dentro del gobierno y en la oposición.

El cómo salgamos de este camino de involución y de crisis ecosocial dependerá de qué propuesta, acción política y capacidad de influencia tengamos en la mayoría social en los próximos años. Debemos trabajar tejiendo alianzas desde lo local a lo global, desde la calle y en las instituciones, señalando en todo momento las causas, las condiciones y las profundas contradicciones de un sistema que se agota y sobre el que tenemos que construir una alternativa viable.

Si nos limitamos a resistir la vorágine del retroceso y de la involución, corremos el riesgo de desaparecer en el intento. Nuestras prioridades deben ser una mirada larga y un camino claro hacia el socialismo, ocupando al mismo tiempo, cuando sea útil, cada espacio de poder y de acción política y social al que tengamos acceso, para seguir transformando el presente. El reciente ejemplo de Portugal nos tiene que hacer reaccionar y salir a una ofensiva constante desde una posición lo más concreta, cohesionada y coherente posible.

Nuestra organización es y debe seguir siendo referente de la izquierda y del cambio, porque tenemos la experiencia, la visión, la organización, las propuestas y la evidencia de que su aplicación mejora las condiciones de vida de la clase trabajadora y la gente más vulnerable.

Una tarea fundamental es reactivar a nuestras bases en torno a la idea de un nuevo paradigma superador del capitalismo con un mensaje coherente que articule las propuestas y que sea fácilmente imaginable a nivel individual y colectivo. Que tenga visibilidad y difusión y que podamos trabajarlo de manera colectiva, junto a toda la sociedad civil organizada, desde el máximo respeto y cuidado hacia la diversidad y la autonomía de cada agente y a través del debate constructivo.

Este documento es la base de un renovado esfuerzo militante y del trabajo y la vocación unitaria que vamos a seguir desplegando desde la izquierda aragonesa hacia un presente y un futuro radicalmente feminista y por tanto anticapitalista, justo, sostenible y de paz. Esperamos que desarrolle un debate fructífero y una síntesis acertada que recoja visiones diversas que lo hagan más rico y fértil. Solo será posible si lo construimos entre todas.

---

## 1. Aragón frente a los retos del nuevo orden mundial: contra la guerra, las desigualdades y el expolio del territorio

Nuestra tierra no es ajena al contexto global. Las desigualdades sobre las que se sostiene el capitalismo y sus fenómenos de acumulación se reflejan en un territorio que, aunque ha tenido un ligero crecimiento demográfico, sobre todo gracias a la población migrante -en torno al 14%-, no es capaz de reconstruir una mejor distribución de la población, que sigue siendo muy desigual, con gran concentración en la capital y los núcleos urbanos y una constante pérdida de población en el medio rural, especialmente en Teruel.

Los dos gobiernos de Aragón que hemos sufrido desde nuestra última asamblea han desplegado diligentemente una hoja de ruta que no se ha apartado un milímetro de las dinámicas neoliberales que favorecen la concentración de recursos, inversiones y población en beneficio único de los grandes capitales, en detrimento de otro modelo productivo posible que distribuya capacidades y oportunidades a lo largo del territorio, revitalizando de manera sostenible, justa y participada la actividad y la vida del medio rural.

Las grandes empresas y fondos de inversión han encontrado en estas dos legislaturas un filón inagotable con el que fagocitar recursos públicos en beneficio privado. Por desgracia,

más allá de la retórica, resulta complicado encontrar diferencias destacables entre los gobiernos de Lambán y Azcón en lo referente al modelo económico y el futuro previsto para nuestro territorio. Lo sufrimos en el despliegue a la carta de la transición energética y la creación del hub tecnológico y militar y en las políticas laborales, de vivienda, cultura, juventud y prestación de los servicios públicos, que son gestionados como bienes de mercado con los que repartir negocio a demanda a las empresas afines.

La economía aragonesa ha repuntado en estos años del 2,5% al 3% del PIB en 2024, y en general por encima de la media española y europea. Crecen el consumo doméstico y las inversiones, con una bajada en las exportaciones a partir de 2023, arrastrada en parte por la bajada de demanda en el sector automoción. Aunque el peso del sector industrial sea mayor en Aragón respecto a la media estatal, seguimos teniendo un modelo productivo frágil, centrado en el sector servicios, hostelería, turismo estacional y logística.

Esto dificulta la supervivencia de la pequeña industria y el comercio local. Nuestra organización ha desplegado un trabajo intenso en relación a esta deriva dañina de la política industrial, con campañas de información y debate ciudadano en el territorio.

Crecen sobre todo el sector servicios y el sector primario, un motor clave en la lucha contra la despoblación al ser el sector que genera más empleo directo en el medio rural aragonés, especialmente en comarcas de baja densidad poblacional, donde puede suponer hasta un 40% del empleo. En este sentido, la ausencia de planificación que adecue la producción agrícola y ganadera a las necesidades sociales, frente a los modelos basados en la sobreproducción destinada a la exportación, siempre sujetos a políticas de desregulación o, por el contrario, a medidas proteccionistas - las dos caras de la misma moneda-; sin garantizar precios justos y fijar población, y favoreciendo la concentración de la producción en un modelo cada vez más intensivo, las políticas arancelarias de EEUU y el sometimiento de Europa a compromisos inviables de gasto, han sumido al sector en una crisis profunda y han provocado preocupación en el territorio.

Los recortes y la redistribución en la PAC que va a sufrir el campo aragonés han movilizado a la gente profesional del sector. Para 2028-2034 implican una reducción del 20-30% y privilegian criterios intensivistas y de acumulación mientras debilitan la agricultura y la ganadería social y familiar, el relevo generacional, la agroganadería extensiva o las prácticas agroecológicas y agroambientales, sin condicionar las ayudas a criterios de sostenibilidad o condiciones laborales dignas.

Así las cosas, la gestión institucional está enfocada en favorecer un modelo productivo concentrado en grandes empresas extractivas -energéticas, renovables, tecnológicas, de ciberseguridad-, interviniendo desde lo público a través de DIGAs y PIGAs a demanda, con opacidad y escaso control democrático. Esto supone una dependencia cada vez mayor de capital externo, que elude impuestos y no garantiza beneficios para el territorio ni la mayoría social, y desequilibra la distribución de la industria, acaparando recursos necesarios para un desarrollo más sostenible y equilibrado del tejido productivo local que fije población.

Esta situación ha convertido a Aragón en territorio de sacrificio y pone en riesgo su sostenibilidad social, económica y ambiental. Esta pérdida de soberanía tendrá un impacto muy fuerte en Aragón en los próximos años si no revertimos esta hoja de ruta nefasta.

La tasa de paro ha ido mejorando gracias a las políticas contracíclicas que han propiciado el crecimiento económico y ha desmontado la falacia neoliberal de que mejorar las condiciones laborales, como la subida del SMI o el fomento de contratos indefinidos, que ha llevado a cabo el gobierno de coalición, limita el crecimiento del empleo. Sin embargo, queda mucho camino en la mejora de la calidad del empleo, los salarios y la estabilidad laboral. Sufrimos con honda preocupación el incremento de fallecimientos en los tajos, derivados en parte de negligentes políticas de prevención, precarizadas en una lógica neoliberal de subcontratación y derivación, una insuficiente inspección laboral y también del cambio climático, que aumenta el riesgo en las condiciones de trabajo en algunos sectores.

La inflación ha ido descendiendo en los dos últimos años tras la subida que experimentó en 2022, consecuencia de la crisis energética, el conflicto en Ucrania y la especulación amparada en el mismo. Las políticas de intervención pública del escudo social y los topes a la energía y la excepción ibérica, han ido recomponiendo los datos de manera insuficiente. La subida de los tipos de interés para combatir la inflación ha supuesto un gran impacto en la capacidad adquisitiva y de consumo de la clase trabajadora, sobre todo en la cesta de la compra y el coste de las hipotecas.

En Aragón, la vivienda sigue siendo el principal problema para la clase trabajadora. Los alquileres alcanzan cifras récord, con precios desorbitados en Zaragoza, Huesca o Teruel, y crece el parque de pisos turísticos sin apenas regulación. La especulación en torno a la vivienda —en manos de fondos de inversión y grandes tenedores— se ha convertido en un negocio que expulsa a la gente de sus barrios y pueblos. El gobierno de Aragón no solo no hace nada por frenarlo sino que además incumple sus obligaciones, manteniendo paralizados los fondos del Plan de Vivienda 2022-2025, derivando responsabilidades al tercer sector y entregándose a modelos de colaboración “público-privada” para la construcción de vivienda “asequible” a la que solo pueden acceder rentas medias y nunca familias trabajadoras, vulnerables o no normativas.

Aunque tenemos la ley de vivienda estatal y la posibilidad de suspender los desahucios de familias vulnerables, en Aragón se sigue desahuciendo: muchas familias esperan una alternativa habitacional a pesar de tener reconocida su vulnerabilidad, y los servicios sociales autonómicos tardan meses en emitir los informes que deberían garantizar el realojo. Frente a este drama cotidiano, el gobierno del PP solo alimenta un discurso sensacionalista sobre la ocupación, cuando los datos demuestran que es un fenómeno irrelevante en nuestra comunidad.

Pese al aumento presupuestario en Aragón en los años recientes y el aumento del gasto en servicios públicos con fondos propios, constatamos el claro retroceso en la calidad de su prestación, con especial deterioro del sistema de salud pública aragonés y del sistema educativo mediante la transferencia de dinero público para financiar y engordar el cada vez más lucrativo negocio privado que se hace con nuestros derechos. También han sufrido las políticas de juventud, los derechos sociales y la cultura para aumentar los beneficios de determinado sector privado y anular espacios de participación social y comunitaria. En definitiva, todo lo expuesto no viene sino a constatar que la derecha, ya sea a nivel local, autonómico o nacional, son básicamente gestores al servicio de los intereses económicos tradicionales y de las grandes corporaciones que están aterrizando en nuestro territorio, y cuyo objetivo son los recursos públicos como nicho de mercado.

La irresponsabilidad fiscal tanto del gobierno del cuatripartito como del actual, fomentando el dumping fiscal y reclamando más recursos del Estado mientras se han ido regulando beneficios fiscales para grandes rentas y empresas, es seña de identidad del neoliberalismo rampante que echa a las espaldas de la clase trabajadora y del Estado la responsabilidad de sostener la fiscalidad autonómica, mientras los que más tienen pagan cada vez menos y nuestro esfuerzo fiscal se transfiere vía privatizaciones y facilidades al sector privado.

En Aragón tenemos un gobierno que no cumple con leyes estatales que, sin ser las mejores, podrían avanzar en derechos en ámbitos como la vivienda o la migración. Se han asumido los postulados fascistas, derogando la ley de memoria democrática y replicando discursos negacionistas, racistas, xenófobos y de criminalización de la pobreza. Se atacan los derechos sindicales y se vende a trozos nuestro territorio para el expolio.

Todo esto se hace sobre un relato falaz, a golpe de titulares diarios y del consiguiente aumento de dinero público destinado a fabricar una realidad alternativa en medios y redes sociales. Liderando esta realidad virtual, el presidente Azcón encarna mejor que nadie la cultura política del PP de insultos, bulos y sometimiento a la extrema derecha, mientras trabaja por sus intereses en Madrid más que por gobernar por y para Aragón. La salida de Vox del gobierno aragonés no ha supuesto retroceder en la agenda ultra, que es consustancial al PP y no solo a su fracción disidente.

En IUA hemos desarrollado un ímprobo trabajo de impulso de movilización y construcción de poder popular, siendo autocríticas con nuestra organización cuando ha sido necesario y con voluntad de cohesión y unidad en el camino político y social común. Esto se ha concretado, en el terreno institucional, en una oposición firme, clara y pedagógica de las políticas que perjudican a los intereses de la mayoría social aragonesa, con un intenso trabajo de propuestas legislativas en todos los ámbitos, que han favorecido y acompañado la acción reivindicativa de toda la izquierda aragonesa y la sociedad civil organizada.

Reafirmamos sin ambages que más allá de las instituciones, el motor del cambio está en los barrios, sindicatos y movimientos sociales. Esa presencia militante y coordinada transforma la protesta en conquista de derechos. En estos cuatro años hemos sostenido esa presencia en múltiples frentes, con un pie dentro y mil fuera: memoria democrática, derechos básicos y de cuidados, servicios públicos, vivienda, paz y contra la guerra y el hub militar, la agricultura o el medio ambiente entre muchos otros, en multitud de actos coordinados y en movilizaciones por todo el territorio, en una ofensiva democrática constante ante la inoperancia del gobierno de Azcón y su campaña de propaganda institucional diaria.

Estamos viviendo movimientos de entrelazamiento entre las diversas luchas y un auge de los movimientos vecinales y sectoriales en los que nuestra organización siempre está inserta y participando activamente, con nuestra experiencia y capacidad militante. Debemos seguir esta senda, intensificando nuestra participación y compromiso y aportando nuestra propuesta de un Aragón socialista, feminista e impulsor de vida sostenible y digna.

---

## 2. Qué Aragón presente y futuro construimos contigo

El medio rural debe situarse como elemento central de toda transformación social, económica y cultural posible. Sostenible es un sistema que puebla el territorio de manera descentralizada, que relocaliza la producción y la distribución en cadenas cortas, con valor añadido, adaptadas al medio y a la gente que lo trabaja y que lo puebla, que hace compatibles el modelo local con otros a mayor escala y que facilita la reproducción de la vida dentro de los límites del planeta de forma justa, participada y con equidad.

La nuestra es una propuesta sólida por un medio rural en el que primen la agricultura y la ganadería social y familiar, que facilite la incorporación de las mujeres, la juventud y las personas migrantes al campo con garantías y derechos, y que despliegue una actividad económica y un desarrollo local que nos dote de soberanía y sostenibilidad a todos los niveles dentro de un marco de soberanía alimentaria, reconociendo la función social de la tierra como elemento indispensable sobre el que construir esa soberanía alimentaria y acometer en ella una producción de alimentos que responda a las necesidades sociales y al derecho básico a la alimentación, al margen de los intereses del mercado. Es indispensable, para ello, avanzar hacia un cambio de modelo agroalimentario, de distribución y de consumo centrado en las necesidades sociales, el derecho a la alimentación accesible, de calidad y potenciar la transición agroecológica. Debemos regular y planificar una transición energética informada, consensuada y viable, que beneficie y cubra las necesidades de la población y que disminuya la huella ecológica. Esto solo es posible siguiendo criterios de decrecimiento justo y democrático.

Esta progresiva transformación debe hacerse desde el foco público y apoyo decidido de las administraciones. No podemos seguir destinando nuestros impuestos y los fondos europeos a fabricar a demanda alfombras rojas para los grandes explotadores y neocolonizadores de tierra, recursos y derechos. El caótico despliegue de las renovables, el apoyo a infraestructuras innecesarias y perjudiciales del cada vez más inviable negocio de la nieve, o la enorme apuesta por seguir ampliando el hub militar en Aragón hipoteca nuestro futuro e incrementa las desigualdades y el daño ambiental.

También hay que impulsar la aún pendiente adaptación de la normativa a la realidad local y territorial y trabajar una fiscalidad responsable y justa. La financiación autonómica tiene que garantizar los derechos básicos de toda la ciudadanía, con corresponsabilidad fiscal y sin dumping entre territorios. Más que principio de ordinalidad, que no responde a criterios de justicia ni resuelve los problemas de desigualdades profundas, ponemos en valor el federalismo, la multilateralidad, la suficiencia financiera y la solidaridad entre territorios para poder garantizar servicios públicos dignos y bien financiados allá donde se habite.

Ante la situación insostenible en materia de vivienda, defendemos que la vivienda no puede ser un negocio sino un derecho. Es imprescindible declarar zonas tensionadas, ampliar de forma urgente el parque público de alquiler social, movilizar las viviendas vacías de grandes tenedores y aplicar sin excusas la legislación estatal para proteger a las familias. Solo con

políticas valientes y públicas se puede garantizar en Aragón el derecho constitucional a una vivienda digna para todas.

Nuestro enfoque feminista implica la reconstrucción total del sistema con criterios de relaciones de igualdad en todos los ámbitos, que sostengan una estructura productiva y reproductiva libre de violencia patriarcal y por tanto libre de violencia machista, económica y capitalista, territorial, imperialista, laboral, social, cultural...

La reconstrucción debe pivotar en un enfoque global de los cuidados: desarrollando buenas condiciones materiales de vida y una conciencia común de interdependencia y de los límites del planeta. Esta política de cuidados debe garantizar sanidad, educación, vivienda, derechos sociales y democráticos, cultura, paz, descanso y desarrollo vital pleno, con una sociedad informada, con espíritu crítico y participación en la toma común de decisiones.

Aragón es territorio de acogida y de paz. Reconocemos el enorme valor que aporta la migración en todos los ámbitos y no podemos consentir discursos de odio que criminalizan y dividen a la población aragonesa. Nuestro antirracismo es identidad y base de construcción de la paz, la igualdad y el reconocimiento de la riqueza de la diversidad para poder vivir en sociedades sanas. La ley de cultura de la Paz debe desarrollarse para concretar estos principios en realidades concretas, y la acción institucional no puede ser de desacato a las leyes estatales ni de sometimiento a postulados fascistas.

Son tiempos de desafección política y populismo, en los que las formas tradicionales de militancia no acaban de ser opciones atractivas para una parte de la juventud, y las “nuevas” fórmulas adolecen de estructuras firmes y capacidad organizativa. La reconexión con la juventud debe ser nuestra prioridad más absoluta. El futuro posible donde nos salvamos todas depende de su empoderamiento, de su análisis político y social y de su acción decidida para hacer emerger esa nueva sociedad.

Nuestra propuesta es socialista y profundamente anticapitalista y sitúa encima de la mesa un cambio de paradigma que debe consolidarse en un conjunto coherente de nuestras propuestas tradicionales, eficaces para transformar, y de los nuevos retos que debemos afrontar. Y ese conjunto coherente debe poder trasladarse a la ciudadanía con un relato, una visión y una propuesta concreta. Tiene que ser aterrizable, desde lo global a lo local, y debe poder comunicarse de forma sencilla y eficaz, con un mensaje unitario que mueva a la acción y al compromiso.

En esta tierra hay muchísima gente consciente, comprometida y organizada que camina y combate junto a nosotras en luchas comunes. La unidad no es un fin en sí misma. Debe ser un vehículo o instrumento para conseguir un cambio real. Su concreción, cuando sea útil y posible, debe alinearse con nuestros objetivos y ser coherente con nuestra praxis política.

Seguimos forjando alianzas con sindicatos, asociaciones de vecinas, estudiantes, movimientos y organizaciones sociales, para que la reivindicación no quede en mera declaración institucional, sino que se convierta en eco y transformación. Y este trabajo debe intensificarse: reforzar la unidad popular, potenciar la participación activa y consolidar una construcción socialista profundamente feminista, que sitúe vida y sostenibilidad en el centro.

Además, somos parte activa de la Convocatoria por la Democracia que impulsa IU federal, con la que aspiramos a ensanchar espacios de resistencia y alternativa frente a los retrocesos democráticos, los recortes sociales y los discursos de odio. Aragón forma parte de ese proyecto colectivo, convencidas de que solo con movilización popular y organización política transformadora lograremos una vida digna para todos y todas.

Esta situación global y local de crisis democrática, ambiental y social tiene que ser, a la vez, una oportunidad real para transformar un sistema caduco, generador de dolor y desigualdades, en otro más justo, por el que militamos y al que dedicamos mucho de nuestro tiempo, de nuestros recursos y, sin duda, lo mejor de nosotras.

---

### 3. El bien común como guía de acción: paz, sostenibilidad, justicia, equidad y derechos

La sociedad nace a raíz de lo colectivo, la primera sociedad es la que cura a los suyos y permite la vida del más débil. Ese concepto de lo común debería conectar con la gente pero hoy la lógica liberal hegemónica rechaza esa construcción colectiva, la cuestiona, la ridiculiza y la deslegitima para poner lo individual como la única guía posible.

A través de los discursos de odio contra el “diferente” y su deshumanización progresiva, contra la ciencia y contra el pensamiento humanista que han jalonado el discurso internacional a partir de mediados del s. XX, ha permeado la idea de que el Estado no sirve, que cada persona debe buscarse la vida, boicoteando el sentido común que evidencia lo contrario y que se construye sobre la defensa de los derechos humanos y la sostenibilidad de la vida en todos sus ámbitos.

Frente al ataque a la ciencia y la deriva a recuperar marcos dogmáticos, es imprescindible recuperar el laicismo como principio indisoluble de la democracia y que garantiza el respeto a todas las creencias dentro del respeto a las leyes. Creencias que al ser derechos de carácter privado, nunca deberían ser principios obligatorios y colectivos de un país. Un Estado aconfesional como el nuestro debería reconocer el derecho de todas las confesiones, pero no adscribirse a ninguna de ellas, y por eso denunciamos el vigente concordato con la iglesia católica, que debe anularse para librarnos del corsé que estos acuerdos suponen en materia educativa, así como para el efectivo cumplimiento de la separación de Iglesia y Estado.

Frente a este discurso del odio que genera miedo y pone en jaque las bases de una buena convivencia, desde la izquierda debemos reforzar ese sentido común general que se apoya en el humanismo, en la ciencia, la sostenibilidad del planeta, la equidad, la justicia, los servicios públicos y la igualdad de derechos para todo el mundo. Y en ese sentido común general, en esos principios compartidos, la paz es un requisito imprescindible para garantizarlos.

En un momento donde se están imponiendo las lógicas del rearme militar en Europa y se vende a la población que es necesario y beneficioso, es fundamental confrontar esta

cuestión y convertirla en una prioridad política, ya que sin paz no hay derechos. La historia de Europa nos enseña que todas las guerras se han precedido por un rearme masivo de los Estados, por lo tanto, parar el rearme de hoy es parar la guerra de mañana.

Para confrontar esta lógica y propiciar otro sistema es imprescindible articular un marco político referente desde el que seamos capaces de desarrollar la alternativa y que pasa por la conceptualización amplia del bien común, más allá de la defensa de lo público, y un sistema político republicano, federal, socialista y democrático que posibilite la soberanía y la igualdad.

Un marco cultural que ponga lo colectivo y el bien común en el centro y que permita a las personas sentirse partícipes de la política, saliendo de la limitada visión institucional para permitir reducir la desafección generada por las dinámicas partidistas y los límites de las instituciones. Un marco cultural que confronte el odio y que permita ser refugio para todas las personas que sienten miedo y rechazo a estos discursos.

### **3.1. Comunidad, participación y democracia**

En el momento actual, la política tiene un alto componente emocional y ha cobrado mucha relevancia el sentimiento de pertenencia que nos facilita el cómo posicionarnos ante la realidad, en un mundo complejo, saturado de informaciones, muchas de ellas sesgadas y tendenciosas, donde impera el pensamiento relativista y el malestar, con precarización progresiva de las condiciones materiales por la evolución del capitalismo y sus sucesivas crisis.

La clase trabajadora, nuestro sujeto político, es la clase mayoritaria dentro del capitalismo europeo, pero su enorme heterogeneidad y fragmentación dificulta tanto la acción sindical como la política. Además, este concepto identitario está denostado y asociado a la pobreza, por lo que necesitamos referenciar en una identidad o identidades compatibles con la clase obrera desde la que recuperar el orgullo de pertenencia y referenciar un proyecto político como el nuestro, construido en base a esos intereses y hacia el desarrollo de lo colectivo.

Una clase obrera aragonesa en la que debemos destacar el peso agrario e industrial que es más elevado que en el ámbito estatal, así como un alto porcentaje de autónomos, ya que el emprendimiento aumenta en las zonas despobladas ante la falta de empleo. También destaca un número muy elevado de empresarios con menos de 5 trabajadores cuya situación de dependencia en el proceso productivo hace que estén más cerca de las condiciones de asalariados que de la pequeña burguesía. La oligarquía aragonesa se reduce a un número muy pequeño de familias y ha aumentado el peso de las multinacionales sin vinculación territorial.

En Aragón también es relevante el sentimiento aragonesista. Vincular dicho sentimiento con los intereses de clase, la memoria colectiva y el hilo histórico de reivindicación y lucha por los derechos desarrollado en nuestro territorio, puede ser una vía de recuperar orgullo de clase y que sea nuestra referencia.

La sociedad aragonesa actual es diversa, pero las comunidades que la conforman están excluidas y aisladas unas de otras, resulta difícil establecer puentes colectivos de

integración y las experiencias individuales de relación con migrantes de segunda generación no parece que hayan modificado prejuicios y concepciones racistas o discriminatorias inconscientes. Es relevante su incidencia en los lugares con alta presencia de temporeros por sus malas condiciones y las dificultades de convivencia, alimentadas por el clima de crispación.

Desde nuestra organización tampoco hemos conseguido establecer dichos puentes y requerimos de una revisión en profundidad de las dinámicas que eliminan el paternalismo y posibiliten espacios reales de encuentro donde se puedan aunar intereses de una misma clase obrera en la que deberemos ser capaces de modificar las prioridades.

Debemos analizar la realidad comunitaria de nuestro territorio para detectar las comunidades cercanas con las que podemos establecer referencialidad y dónde se materializan, dónde se genera su socialización, ya que ese es el lugar donde encontrarnos y donde posibilitar vías de comunicación. Los barrios, los movimientos sociales y nuestros pueblos son los espacios materiales de encuentro y de acción política.

Es fundamental encontrar la vía de comunicación con esas comunidades de personas que entienden la importancia de lo colectivo en el desarrollo de la experiencia cotidiana. Desde las personas organizadas que suponen el ámbito más cercano, donde nos planteamos seguir colaborando en potenciar su capacidad de intervención política y su participación en el cuestionamiento de las lógicas neoliberales, encontrando alianzas de acción y reforzando lo organizado. Pero también estamos alertas a nuevas vías de organización en la calle y en las redes que respondan a la realidad material de las personas y a sus intereses, a las que debemos ser capaces de interpelar y referenciar hacia un marco colectivo común.

Desarrollar cultura política en lo cotidiano es analizar la realidad cercana y proponer soluciones y procesos reivindicativos que no se queden en la queja o la victimización, que acumulen fuerzas contra la derechización de la sociedad. La construcción colectiva de soluciones y procesos -la participación sociopolítica- es la que genera conciencia de clase.

En este sentido, nuestra organización debe seguir formando militancia capaz de participar políticamente y ejercer esa labor en el tejido social del territorio fortaleciendo organizaciones y redes, identificando vías de construcción comunitaria, alianzas e intereses comunes, así como riesgos y amenazas para la convivencia y poder intervenir para prevenir y denunciar.

Los servicios públicos son fundamentales como garantes de derechos y de condiciones materiales de vida de la ciudadanía que para nosotros suponen el centro de nuestra actividad política y por los que velamos desde nuestra acción institucional, pero también desde la participación social, imprescindible para ganar los debates políticos.

Complementando estas acciones, es relevante nuestro papel en las instituciones, trasladando las demandas detectadas y profundizando en líneas de trabajo que nos permiten generar complicidades en la construcción colectiva de la alternativa, empoderando a las organizaciones y movimientos en su autonomía política -tanto en la relación con las instituciones como en el desarrollo de proyectos de autogestión-, para abrir vías de comunicación, visibilidad y de referencialidad hacia nuestra organización.

Las instituciones tienen muchas limitaciones pero también muchas herramientas para hacerlas útiles y posibilitar debates políticos necesarios para poder avanzar como sociedad. En este momento, la derecha ahonda en el cuestionamiento de las instituciones y por tanto de la democracia, para posibilitar autoritarismos, porque necesita anular el debate y la confrontación de ideas, cuestión que ya está presente en nuestras instituciones cuando los debates son ataques personales o partidistas, vacíos de contenido político.

Somos conscientes de las limitaciones de las instituciones para transformar la realidad y de que su superación dependerá del avance en cultura política de la sociedad y no de su simple eliminación o reducción. Por eso, desde la vía institucional seguiremos trabajando para desarrollar al máximo sus capacidades y el cumplimiento de las leyes, dotándolas de medios para garantizar los servicios y aportando profundidad a los debates políticos para cuestionar el marco de la lógica neoliberal imperante.

## **3.2. Poniendo la vida en el centro: feminismo y sostenibilidad como nuevo paradigma vital**

En la batalla cultural de hoy en día, debemos visibilizar y respaldar claramente los ejes de transformación del feminismo y el ecologismo, ya que son planteamientos que confrontan con el capitalismo y sus lógicas.

El feminismo es esencial para denunciar la explotación capitalista en su lógica productivista y las consecuencias que genera, invisibilizando el papel fundamental para la vida de la esfera reproductiva. La brecha salarial en Aragón es de las más altas del Estado con un 24%. y los cuidados siguen recayendo en los hogares y cuando estos lo trasladan al mercado, esto se cubre por mujeres migrantes con un alto grado de desprotección. Denunciar y revertir esto es un objetivo político fundamental y hay que desarrollar la perspectiva feminista interseccional: no hay una única categoría de mujer y los ejes de opresión se conjugan, multiplicando sus efectos. Ser conscientes de esto es evitar reproducir estas cuestiones, visibilizando el suelo pegajoso que impide a las mujeres desarrollar su proyecto vital.

Por otro lado, el ecologismo señala los efectos del capitalismo sobre el planeta y los riesgos que conlleva para la vida, pero todavía subyace un tecno optimismo que limita actuaciones contundentes para confrontarlo. El sistema capitalista se viste de verde para camuflar sus efectos y las sociedades privilegiadas se resisten a modificar hábitos de consumo de manera relevante. Es básico en la construcción del marco común integrar nuestro papel como consumidores y la capacidad y poder que tenemos sobre el consumo responsable. Es esencial apostar por energías renovables, transportes colectivos o producción agrícola y ganadera con criterios de justicia social y territorial, y planificar un decrecimiento que incluya debates colectivos para enmarcar nuestra futura estructura productiva.

## **3.3. Justicia social y derechos para todas las personas**

Una sociedad democrática es aquella en la que todas las personas pueden ejercer plenamente sus derechos cuando son la respuesta a la cobertura de sus necesidades materiales, sociales y políticas. Parte de la sociedad los percibe como naturales pero han

sido fruto de la lucha colectiva, de la lucha de clases que aún está vigente. Están en diferente grado de desarrollo y conforman los objetivos de la vida en común. Un ejemplo son los derechos culturales, poco conocidos y reconocidos, y son una asignatura pendiente.

Muchos de esos derechos forman parte de leyes que no llegan a desarrollarse completamente, convirtiéndose en derechos solo en el papel. Forma parte de nuestra labor política exigir y posibilitar que se cumplan. Muchas veces se correlacionan con unos servicios públicos sometidos a la lógica del mercado al externalizarlos, priorizando la reducción de costes. Dos labores constantes que llevamos a cabo en las instituciones, siempre coordinados con los comités de empresa y los sindicatos de clase.

Es imprescindible visibilizar el maltrato institucional que se ejerce contra las personas en el ejercicio de sus derechos, imposibilitándolos de facto o limitando su ejercicio, muchas veces por procedimientos burocráticos que no tienen en cuenta la realidad de las personas que deben atender y deslegitimando además, el papel de lo público.

Tampoco ignoramos el retroceso en derechos que llevan a cabo los gobiernos de derechas. En Aragón nos enfrentamos a gobiernos que se basan en “el café para todos”, que reparte los recursos de la administración sin criterio de equidad, excluyendo de facto y beneficiando a los de siempre. Un gobierno además sometido a una extrema derecha con características fascistas cuyas exigencias nos retrotraen a una España en blanco y negro, uniforme y excluyente.

El marco común que representa nuestro proyecto político debe integrar la diversidad, no como un sumatorio de realidades diferentes sino como un sistema en el que se aborden y confronten las discriminaciones para corregirlas, garantizando el acceso a derechos reales y siendo conscientes de que, cuando el sistema responde adecuadamente a las personas con mayores discriminaciones, se mejora la atención a toda la población. Nuestro sujeto político es una clase obrera heterogénea que debe verse reflejada en nuestra alternativa.

Pero además, en Aragón es fundamental incorporar la perspectiva territorial en la cobertura de los servicios públicos y en la garantía de los derechos. No podemos olvidarnos de que la mayor parte del territorio aragonés tiene una bajísima densidad de población. Esto no puede ser una excusa para una dotación inadecuada de servicios; debe promocionarse y facilitarse que toda la población tenga acceso adecuado a servicios públicos y a oportunidades de participación socio política y cultural en una concepción integral de los derechos.

### **3.4. Soberanía y cogobernanza**

La defensa de nuestro modelo de Estado republicano parte de la necesidad de dotarnos de un instrumento constitucional que ayude a resolver las contradicciones derivadas de una realidad plurinacional, multicultural y plurilingüe, de forma que se asuma la diversidad de la composición del Estado, garantizando los reequilibrios territoriales y sociales: un Estado que haga efectivos los principios de igualdad y justicia social, que esté basado en la cooperación horizontal, tejiendo una red de solidaridad que permita la distribución del poder, superando la visión centralista.

La República federal plurinacional y solidaria que constituye nuestro proyecto político avanzará en función de cómo se desarrollen las cuestiones relativas a la soberanía y la

cogobernanza, que se deben materializar en un modelo descentralizado real, donde el debate fiscal y financiero supone la clave para profundizar en la agenda federalista.

En confrontación a este modelo, se encuentra la derecha más reaccionaria, que apuesta por el centralismo nacionalista, y que rentabiliza una aplicación desigual de la cogobernanza con comunidades históricas que se han visto privilegiadas frente a otras, utilizándolo para aumentar el malestar y la confrontación, pero sin propuesta para abordar las realidades territoriales.

Es muy evidente en Aragón, donde la identidad de “en contra de” se evidencia tanto en el ataque a Cataluña como objetivo político como en la oposición al gobierno estatal con cualquier motivo y responsabilizándole de su pasividad e inacción en el desarrollo de las competencias propias, como la garantía de ingresos o el desarrollo del sistema público de cuidados. La apelación a Aragón como tierra de pactos se está utilizando para evitar la visibilidad de modelos políticos diferentes y para forzar posicionamientos comunes de confrontación que sólo tienen interés partidista.

Vivimos un momento de pasiones centralizadas en la política estatal, a la que se hace responsable de todo, ignorando el resto de niveles administrativos, lo que dificulta el avance en cogobernanza que debe ir de la mano de la corresponsabilidad. Porque mientras en Aragón se exige más financiación para desarrollar las competencias propias y se mira al resto de comunidades para justificarlo, se reducen los impuestos a los ricos limitando la capacidad de ingresos propios, y se ignora nuestro papel corresponsable en la respuesta a necesidades nacionales como el acogimiento de menores migrantes no acompañados.

Hay mecanismos de cogobernanza interadministrativa que se convierten en foros partidistas que dependen demasiado de la voluntad de las partes, anulando la capacidad solidaria entre comunidades y deberían usarse para avanzar la senda común. Necesitamos potenciar la cogobernanza con las entidades locales y con las herramientas interdepartamentales en una concepción más integral de la política, pero esto sigue sin trasladarse a la realidad, generando frustración e inoperancia de lo público.

Más complicada es la cogobernanza a nivel internacional, con subordinación a una UE cada vez más rechazada políticamente y a una OTAN al servicio de los intereses estadounidenses, que atenta directamente contra nuestra soberanía.

Existe otro nivel de cogobernanza con la sociedad civil que se ha desarrollado a un nivel meramente formal o invalidado, con órganos de participación consultivos que no se convocan o se reducen a informar de la acción de gobierno, aumentando la desafección y la capacidad para avanzar en propuestas. Hay que generar mecanismos de intervención desde la sociedad civil para incidir en la construcción de soluciones, identificar aliados con capacidad agente y desarrollar lógicas y herramientas cuyo objetivo sea el bien común, como la fiscalización de las contrataciones por los comités de empresa.

En Aragón hay un amplio consenso en la colaboración público privada por parte de los gobiernos liderados por PSOE y PP, donde las empresas gestoras de servicios públicos sí encuentran vías de relación fluida con la administración. Pero también tenemos un tejido productivo vinculado al territorio que debe aumentar en protagonismo y capacidad de cogobernanza: la economía social, la agricultura y ganadería familiar social y sostenible y

nuestros autónomos y pymes, frente a las grandes corporaciones y grupos inversores o empresas sin base ni arraigo territorial. IUA aboga por una gestión 100% pública de los servicios públicos.

Y es que la gobernanza se vincula directamente con la soberanía y con la capacidad de diseñar y dirigir las políticas de desarrollo y vertebración de nuestro territorio.

A pesar de que el golpe de estado de 1936, en Aragón, frustró el avance en soberanía que estaba llevando a cabo la segunda república, se aprobó por la vía lenta su estatuto de autonomía en 1982, con varias actualizaciones. La soberanía aragonesa está lejos de ser una prioridad para los partidos que han gobernado, más allá del relato interesado de confrontación con el estado central.

Pero lo más preocupante son las lógicas económicas por las que Aragón se “vende”: facilitando la proliferación de aerogeneradores sin control que ha propiciado la implantación de macro-granjas de datos de las grandes multinacionales y facilitando la reconversión de industria civil en militar hipotecando el futuro. El gobierno busca titulares de lluvias de millones de inversión sin planificación a medio plazo de las necesidades estratégicas. Esta se delega en la empresa privada, con nefastos resultados y millones de inversión perdidos que no revierten en el territorio.

En la gestión de lo público en Aragón hay una cesión de soberanía a la empresa privada con aumento de privatizaciones que no se fiscalizan, simplificación administrativa solo para las grandes empresas y proliferación de PIGAS que perdonan impuestos y tasas municipales, hipotecando la autonomía financiera municipal, y agilizan plazos, en aras del interés privado. Para nuestro proyecto político, soberanía es defensa del territorio, planificación de recursos y tecnología, no subordinación a las multinacionales.

---

## 4. El poder de lo público como eje vertebrador

En este contexto de fortalecimiento del individualismo y de la lógica del “sálvese quien pueda”, IUA entiende que es el momento de hablar de cooperación, producción, de lo público, de vidas seguras, de equidad y de justicia. Las crisis atravesadas en las últimas décadas han demostrado el papel protagonista de lo público, del estado, para buscar una salida a las mismas, y la forma en la que se ha hecho ha demostrado que hay alternativa a la austeridad y a los recortes.

La crisis financiera global que se inició en 2008 se afrontó con políticas de rescate de los sectores financieros y recortes en el gasto público, sobre todo de carácter social, debilitando la capacidad de las administraciones e incrementando las desigualdades sociales. Generó un duro y largo sufrimiento en las familias más vulnerables. Sin embargo, la forma de afrontar por parte de la UE y el Gobierno de España la crisis sanitaria, social y económica generada por la pandemia, la provocada por la falta de suministros y la guerra de Ucrania, ha demostrado que se puede impulsar la economía y tejer un escudo social desde lo público, con mayor solvencia cuando la capacidad de las administraciones es mayor.

Los fenómenos meteorológicos extremos, provocados y acentuados entre otros factores por la crisis climática, también han requerido, y lo harán aún más en el futuro, de los recursos públicos, del sistema común, al que se le requieren los medios y se le exigen acciones cuando se queman los montes o se inundan zonas muy pobladas.

Desde IUA debemos ser garantes de la fortaleza del Estado, confrontando las políticas que lo debilitan desviando los recursos hacia el sector privado, socializando pérdidas y privatizando beneficios, o permitiendo que el beneficio empresarial y especulativo se haga a costa de los valores naturales, patrimonio común a preservar; e impulsando medidas de refuerzo de la capacidad de lo público en los sectores básicos y estratégicos, mejorando los servicios públicos, incrementando la cartera de derechos y regulando las actividades para proteger el patrimonio histórico, cultural y medioambiental, para que no se produzcan abusos y se incrementen las desigualdades sociales y territoriales.

Cuando todavía estamos condicionados por las reglas fiscales y las haciendas públicas están encorsetadas bajo el techo de gasto, hay que luchar para cambiar el paradigma, definiendo un suelo mínimo de necesidades que garanticen vida digna para las personas y un techo ecológico definido por la capacidad de regeneración natural del planeta.

## 4.1. Recursos para un Estado fuerte

El liberalismo económico que ha dominado las políticas de quienes han gobernado las principales instituciones ha provocado un debilitamiento de la capacidad del Estado. Este proceso continuo se ha producido de forma desequilibrada. Por una parte, se ha desfiscalizado el patrimonio y el capital o se ha perdido en la progresividad de otros provocando que paguen menos impuestos quienes atesoran mayor riqueza, mientras se ha mantenido la presión fiscal por la vía de los impuestos indirectos, generalmente los vinculados al consumo, que son los que pagamos por igual entre todas las personas.

Claro ejemplo lo tenemos en Aragón con los últimos gobiernos autonómicos, que han introducido cinco rebajas en el impuesto de sucesiones desde 2015, o en el último presupuesto aprobado entre la derecha y la ultraderecha, que ha perdonado el impuesto de patrimonio a 6.000 declarantes -una merma recaudatoria de 12 millones de euros-, mientras sabemos que la riqueza, el PIB, ha crecido.

En contra del mensaje de que Aragón es un infierno fiscal, sabemos que la Comunidad Autónoma cuenta con un déficit presupuestario estructural, cifrado por la Cámara de Cuentas, según los años, entre 250 y 400 millones de euros, y que tenemos un margen de alrededor de 450 millones de euros de recaudación fiscal en relación con el resto de las comunidades autónomas en virtud de nuestro PIB.

En IUA somos coherentes con la propuesta fiscal que planteamos para Aragón, queremos más recursos para tener un Estado más fuerte, y estos tienen que establecerse en un marco general tributario ajustándose a los principios establecidos en el artículo 31 de la Constitución Española: para contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo a la capacidad económica de cada cual y con justicia, inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Defendemos el papel del estado en la redistribución de la riqueza.

Toda propuesta, dentro del margen impositivo que tiene la comunidad en el marco de la financiación autonómica, que afecte a los recursos económicos de la comunidad, debe ligarse al análisis de las necesidades en aras de satisfacer debidamente las competencias atribuidas y los compromisos políticos.

A la par que se van adoptando rebajas y regalos fiscales en el ámbito autonómico, las comunidades autónomas del PP incrementan la demanda de mayores recursos a la Administración General del Estado, que ha financiado gran parte del incremento del gasto público para atender la recuperación económica desde la pandemia y ahora ha acordado asumir la deuda que generaron tras la crisis financiera, ya que tuvieron que atender los servicios públicos esenciales en un contexto de caída de la recaudación.

Ahora está abierto el debate sobre la financiación de las autonomías. Todas reclamamos una mejor y mayor financiación, puesto que ha quedado patente que la mayoría no cuenta con los recursos suficientes y el sistema provoca desequilibrios importantes entre las personas que viven en distintos territorios por la irresponsabilidad de los gobiernos de derechas que, con la excusa de la competitividad fiscal, provocan dumping entre vecinos y una merma en la captación de recursos económicos para las administraciones públicas.

Históricamente, las fuerzas políticas aragonesas han mantenido voluntad de tener posición común en el debate sobre la financiación autonómica, en la que IUA nos mantenemos, pero en los últimos años, por la posición centralista y desfiscalizadora de la extrema derecha y un tacticismo irresponsable del PP, se ha roto.

El sistema actual está superado y se necesita un nuevo marco de financiación de las autonomías, que no se modificó con la mayoría absoluta de Rajoy y que hoy requiere de mucho diálogo y negociación entre estado y comunidades, gobernadas mayoritariamente por un PP intransigente, además de contar con el apoyo de la mayoría parlamentaria.

España debe avanzar en un estado más federalizante, hacia la mejora de la financiación de las autonomías, y por tanto la mejora de los servicios públicos. Y debe hacerse de forma que haya un estándar de calidad y de garantía en la prestación de la cartera de servicios equitativos para todas las personas, vivan donde vivan. Seguramente serán necesarios mayores ingresos, tanto del Estado como por las administraciones autonómicas, y deberán contar con un sistema de armonización fiscal y a las que se debe exigir corresponsabilidad.

El tiempo ha demostrado que otras formas de financiar los servicios públicos no son más que fórmulas para adelgazar y precarizar lo público y es por ello que rechazamos la mal llamada colaboración público privada, en la que lo público asume los riesgos y pérdidas económicas y el sector privado empresarial se lleva el beneficio, o las privatizaciones de servicios públicos o la externalización creciente en favor del sector privado para la gestión de servicios esenciales.

En los últimos años hemos asistido al incremento sustancial de las subvenciones que ha otorgado el estado al sector privado, en el marco de la recuperación económica principalmente. Ayudas públicas que no han estado condicionadas a un compromiso social, territorial, medioambiental o con las políticas de igualdad dentro de la empresa.

La mejor forma de que los recursos públicos no pasen a manos privadas sin tener capacidad sobre decisiones futuras de los entes privados, sería mantener las aportaciones públicas como participaciones accionariales, y en cualquier caso, las aportaciones públicas deben estar vinculadas a unos compromisos concretos de calidad y permanencia del empleo, al respeto ambiental, la vinculación con el territorio y las políticas de género en la empresa.

Igualmente, las ayudas -directas o por vía de los beneficios fiscales- a la vivienda en propiedad han supuesto que, tras muchos millones aportados en las últimas décadas, el estado no cuente con un parque público de viviendas que nos permita incidir en un mercado altamente especulativo que no garantiza el derecho a una vivienda digna desde lo público. Mientras existan ayudas a la compra de vivienda protegida, es esencial que tal calificación sea de por vida, con la reversión al estado en el caso de venta por parte de la propiedad.

## 4.2. Políticas públicas para sostener la vida

Desde IU queremos poner de manifiesto el valor irremplazable de los servicios públicos. Tenemos el convencimiento de que la lucha por lo público es la lucha por los derechos universales de todas y todos. El blindaje de los derechos de las personas supone actuar para que dispongamos de servicios públicos de calidad que garanticen vivienda, sanidad, educación y cuidados. Estos derechos deben de quedar recogidos con compromisos económicos que doten adecuadamente las obligaciones presupuestarias para desarrollarlos y hacer frente a sus necesidades. Cada derecho debe de estar garantizado por un servicio público que lo haga efectivo.

Seguiremos defendiendo una estructura estatal que garantice servicios públicos esenciales como la Educación, la Sanidad o los Servicios de Emergencias sólidos, accesibles y al servicio de la mayoría social.

La infraestructura pública debe ser resiliente ante las emergencias y orientada a priorizar a quienes requieren mayor protección. Las crisis recientes nos reafirman en una convicción: lo público debe ser sólido, redundante e incluso sobredimensionado. No podemos permitir que hospitales, ambulancias o servicios de emergencias operen al límite en su día a día. Si lo normal es la saturación, queda poco margen para las emergencias.

Es necesario proteger a quienes sostienen nuestros servicios esenciales, garantizar sus derechos laborales, sus condiciones de trabajo y su bienestar físico y mental. Son ellos y ellas quienes nos cuidan en los momentos difíciles, y merecen ser cuidados también.

Es imprescindible revertir dinámicas y lógicas que nos llevan a la desaparición de lo público y evitar externalizar las prestaciones o gestión de los servicios previstos en las políticas sociales tanto en actores privados como en entidades del Tercer Sector, ya que estas figuras suponen siempre precarización de los servicios por lo que estos se deben gestionar de forma directa y garantizar su prestación por las administraciones públicas. Se deben adoptar las medidas necesarias para que lleguen a toda la ciudadanía en condiciones de calidad.

No podemos olvidar que la gestión privatizada tiene como principal objetivo el beneficio económico sobre cualquier otro, y no el beneficio social o ambiental. Las fórmulas de

gestión indirecta se basan en la reducción de costes e inciden en las condiciones laborales de las personas que prestan el servicio y en la calidad del servicio prestado, y suponen una reducción de los recursos necesarios para fortalecer los servicios de gestión propia.

El carácter público de los servicios es condición necesaria para garantizar su eficiencia, suficiencia y eficacia. Una correcta gestión directa permite una mejor adaptación a nuevas necesidades y mejor coordinación con otros servicios públicos, garantiza un marco de relaciones laborales más justo y servicios de mejor calidad, y una mejor relación con el administrado y su participación directa en la gestión, que permite mejoras en la misma. Otro elemento importante es que garantiza la equidad de derechos a toda la ciudadanía del territorio. En cuanto a los costes, al carecer de beneficio industrial, son mucho más reducidos. Por todo ello, es preciso recuperar la gestión directa de los servicios públicos y renovamos nuestro compromiso de avanzar en esa dirección.

La pandemia puso de relieve las dificultades para el acceso a los servicios públicos y el buen trato hacia la ciudadanía por parte de la administración. Se requiere una intervención eficaz y enérgica que revise los procedimientos y requisitos de acceso a los derechos, removiendo los obstáculos que lo dificultan. Estas barreras impiden su garantía y la excesiva burocratización perjudica el ejercicio de derechos elementales y es una traba importante para el desarrollo de los servicios públicos.

Desde IUA entendemos la simplificación administrativa como algo que debe hacer la vida más sencilla a la ciudadanía que necesita acceder a los servicios, con un trato más sencillo, que recupere la confianza de la ciudadanía en la administración pública, y la certidumbre de que ésta permanece a su servicio y no al revés. Esto hace necesario un enfoque centrado en el usuario y el ejercicio de sus derechos. La calidad del servicio público depende de su vinculación a la realidad y a las necesidades de los usuarios. La tecnología debe de estar a su servicio, facilitar el desarrollo y no dificultar o impedir la prestación de los servicios.

#### 4.2.1. Economía y empleo

Nuestra economía se rige bajo un libre mercado ficticio, intervenido por los estados y las organizaciones internacionales con el propósito de defender los intereses del capital y lejos del interés general de los pueblos. En esta línea, el modelo productivo no está enfocado a atender las necesidades de las personas o el interés de la sociedad dentro de los límites de nuestro entorno natural, sino que se basa en la generación de beneficios especulativos, de crecimiento y desarrollo económico ilimitado, acumulativos de la riqueza, a costa de prácticas extractivistas de recursos, de externalizar los impactos negativos y de privatizar las estructuras colectivas y estratégicas. Por lo que hemos de apoyar la economía social y solidaria, impulsando el cooperativismo frente a los valores de competitividad que fundamentan el capitalismo.

En este sentido, la economía aragonesa representa un claro exponente de este modelo en el que se ha favorecido la implantación de grandes proyectos que requieren un gran consumo de recursos naturales, a veces con una gran precarización laboral, gran impacto ambiental, territorial y social y que aportan pocos beneficios para el conjunto de la sociedad y del territorio. Es la industria del turismo de la nieve, la producción industrial de carne, las

grandes centrales de energías renovables o, más recientemente, los centros de datos, todo sin un previo debate social.

Es urgente un cambio de modelo productivo que deje de concentrarse en macroproyectos insostenibles social y ambientalmente por otro que sea generador de empleo de calidad, de forma equilibrada y vertebrada en nuestro territorio. Asumimos retos como la seguridad y soberanía alimentaria, la preservación medioambiental, la lucha contra el cambio climático y la resiliencia frente a sus efectos, la revolución tecnológica y digitalización o la transición energética hacia las energías renovables, con planificación y de una forma distribuida.

Hay que generar alternativas productivas que contribuyan a la fijación de población y al empleo de calidad y alto valor añadido, y al mismo tiempo satisfagan necesidades básicas de forma sostenible. La reindustrialización descentralizada, la investigación y la innovación pública deben ser dos objetivos que han de trasladarse a la planificación económica.

Desde el Gobierno de Aragón se presume de la inversión prevista por grandes empresas, fundamentalmente tecnológicas, pero lo que no dicen es el alto coste y la poca rentabilidad social que estos proyectos con los que se especula -incremento del PIB de la comunidad hasta un 15%-, puedan dar a la sociedad, ya que no van a aportar en impuestos de igual manera, generan muy poco empleo y consumen grandes recursos (suelo, agua y energía) y desplazan a otras actividades productivas como la agricultura y la ganadería en esa competencia por suelo y recursos.

La inversión, apoyada desde las instituciones públicas, debe orientarse hacia procesos productivos de reconversión de la economía y mayor diversificación y desestacionalización. Cobra especial relevancia el sector de la economía social, el modelo social y familiar de agricultura y ganadería y las PYMES y los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia; agentes de la economía con una evidente vinculación al territorio, que aportan calidad, diversidad y estabilidad.

El sistema productivo y económico en Aragón exige una mirada a lo local, a la participación, a la radicalidad democrática y un planteamiento de gobernanza social y cogobernanza institucional que permita que las propuestas respondan a las necesidades reales y tangibles de las personas y al interés general.

En algunos casos se requieren grandes infraestructuras o importantes aportaciones de capital, solo desde lo público se pueden garantizar estos principios. Por ello es imprescindible defender la prestación de los servicios básicos en manos de las instituciones públicas, alejadas de la avaricia del beneficio empresarial como único objetivo; y hacerlo con estructuras productivas participadas desde las administraciones y con control público, de forma que se responda el interés general y social, por encima del mero balance empresarial. Es necesario recuperar el protagonismo de lo público en sectores como el financiero, la energía, la agroalimentación, la farmacia, el transporte, las telecomunicaciones o las nuevas tecnologías.

Una sociedad justa reparte el crecimiento y la riqueza generada, y esto solo se produce con empleo de calidad, estable, con derechos y que permita conciliar y disponer de mayor calidad de vida. Y no hay empleo justo sin igualdad y con las actuales brechas de género.

Es justo reconocer avances en esta materia con nuestra participación en el ámbito estatal: el escudo social, el incremento del SMI o la reforma laboral son ejemplos claros, pero son medidas insuficientes, es necesario continuar la senda que permita que el incremento de la productividad no solo se salde con más beneficios empresariales, sino que sirva para mejorar las condiciones del trabajo y que, a la vez, permita empleo para todas las personas.

En esta dirección deben ir los esfuerzos de las administraciones para impulsar la economía: creación de empleo digno y de calidad y contratación laboral estable, empezando por el ámbito de las competencias propias del Gobierno de Aragón y continuando con condicionantes laborales a todas las empresas que perciben ayudas públicas.

La alta siniestralidad sigue siendo una asignatura pendiente, cada año mueren o sufren accidentes graves demasiadas personas en el tajo. Cada víctima de un accidente laboral es un drama y es necesario evitarlo como sea. No bastan las campañas de publicidad, que no atajan la vergonzante cifra de siniestros graves en el trabajo, es necesario el refuerzo de los sistemas de inspección y control desde los organismos públicos, asegurando que las empresas ponen los medios para evitar accidentes, pero también que la vigilancia sindical de seguridad y salud en el trabajo llegue a todas las empresas con la instauración del Delegado Territorial de prevención.

#### 4.2.2. Vivienda

La vivienda es uno de los pilares fundamentales para una vida digna, sin embargo asistimos a una mercantilización cada vez mayor de un derecho básico que impide a nuestra juventud emanciparse, que ahoga con los precios de los alquileres y los abusos de los arrendatarios y que expulsa a nuestras vecinas y vecinos de sus casas, pueblos, barrios y ciudades.

En IUA no dudamos en señalar que la base del problema es en permitir que la vivienda siga las lógicas capitalistas de mercado, siendo en la práctica un producto de inversión cuando tendría que ser un derecho humano asegurado principalmente desde un sistema público de vivienda.

En Aragón la crisis de vivienda se manifiesta en diferentes realidades concretas; desde la alfombra roja a la turistificación en muchas zonas de Aragón, que deja sin apenas vivienda fuera del alquiler turístico -solo en la provincia de Huesca hay 2.654 VUT declaradas representando el 63,7% de las declaradas en Aragón-, a la poca inversión en rehabilitación y puesta a disposición de viviendas en una parte importante del mundo rural o el amañado juego del monopoly que se vive en las capitales con la co-participación de las principales instituciones -Gobierno de Aragón y los ayuntamientos de Huesca, Zaragoza y Teruel-, que trabajan por mantener el negocio de los promotores privados con recursos públicos, hipotecando nuestro futuro.

Desde IUA defendemos que Aragón necesita unas verdaderas políticas públicas de vivienda que rompan con las lógicas de mercado y que sitúen de manera clara el derecho a una vivienda digna en el centro de su acción política a través de un gran parque público de vivienda, la movilización de la vivienda vacía, la rehabilitación y actuaciones de mediación frente a desahucios y ejecuciones hipotecarias, y sin olvidar que todo esto debe ir acompañado de servicios, accesibilidad y calidad del espacio público. Una medida

fundamental por la que debemos apostar es la intervención desde las instituciones en la regulación del mercado del alquiler y no dejando que fije los precios el mercado.

### 4.2.3. Salud

Vivimos en un sistema que nos enferma, por lo que todos los determinantes de salud actúan en nuestra comunidad sin que la perspectiva de salud en todas las políticas se haya hecho efectiva ni haya sido incorporada a la dinámica social. Aunque la salud pública ha adquirido más relevancia tras la pandemia, esta tiene un carácter más formal que real, sin capacidad para actuar. Algo muy similar ocurre con los Consejos de salud, que no tienen ningún tipo de apoyo para potenciar el enfoque comunitario.

La situación de la sanidad aragonesa sigue la senda estatal, marcada por la ley 15/1997 que permite la privatización de la sanidad, que se caracteriza por un modelo hospitalocéntrico y farmacológico, centrado en la atención a la enfermedad, con déficit crónico de profesionales y largas listas de espera que sustentan el aumento de la colaboración público privada, ya que donde no llega la sanidad pública, la cobertura del derecho a la salud se convierte en una oportunidad de negocio, perdiendo equidad en el sistema y capacidad de actuación preventiva.

La doble actividad y la alfombra roja a la sanidad privada son en la actualidad las amenazas más graves a la calidad del sistema público de salud.

La atención primaria, que debía ser la columna vertebral del sistema sanitario, sigue desvalorizándose y precarizándose, y de desarrollar atención comunitaria ha pasado a dar respuesta solo a la atención continuada, que no garantiza la salud y es fácilmente externalizable, como está pasando en Alcañiz o Calatayud. La situación es de especial gravedad en la zona rural, pero también existen ya zonas muy saturadas en el ámbito urbano.

La salud mental sigue muy precarizada ya que está ampliamente concertada en los recursos vinculados con la rehabilitación y porque además no se ha llevado a cabo la implantación del enfoque de salud mental comunitaria que pudiera dar respuesta a los malestares de forma colectiva. Esto ha hecho que se potencie la medicalización. Especial importancia ha cobrado la salud mental infanto juvenil y el aumento de suicidios en la comunidad, aunque sigue sin ser dotada de los recursos necesarios para dar una respuesta adecuada y con un enfoque individualizado.

A pesar de las inversiones en infraestructuras sanitarias, existen desigualdades en el acceso a los recursos sanitarios en los diferentes sectores sanitarios, y el debate sobre el mapa sanitario no se quiere ni se pretende corregir, ya que se ha orientado a la reorganización de la atención primaria para adaptarse a la escasez de medios personales.

La salud laboral sigue dependiendo excesivamente de las mutuas, y a pesar de que se ha creado la figura del médico centinela, no hay un compromiso evidente con la detección de enfermedades profesionales.

En nuestra comunidad es relevante el transporte sanitario, claro ejemplo de la precariedad que supone la externalización de servicios esenciales y la necesidad de vertebración que

requiere nuestra tierra. También queremos destacar la interrupción voluntaria del embarazo, que está totalmente concertada y se lleva a cabo solo en Zaragoza, reforzando la estigmatización. En cuanto a la atención a una muerte digna, se está implantando muy poco a poco.

Por último, nuestro sistema sanitario no ha desarrollado un plan de igualdad que afronte los diferentes sesgos de género presentes en la atención y promoción de la salud que va más allá de la salud sexual y reproductiva.

#### 4.2.4. Medio ambiente

La pervivencia del planeta no es posible en el marco de un sistema económico que fundamenta su lógica de crecimiento ilimitado de beneficios en la explotación de la vida, los recursos naturales y la externalización de riesgos y costes ambientales de forma temeraria.

En el caso de Aragón implica un impacto insostenible si se concretan las erróneas apuestas a futuro que se están proyectando, en especial la sustitución de tecnologías basadas en combustibles fósiles por otras de origen renovable sin planificación ni reflexión previa.

Aragón requiere una reconversión ecológica de su economía con propuestas alternativas: planificación territorial y económica, custodia del territorio, economía circular -cuestionando el actual modelo de consumo-, planificación energética, protección de la biodiversidad y paisajes o un modelo agrario y ganadero que profundice en la soberanía alimentaria en lugar de la producción de alimentos con lógicas depredadoras y especulativas, y que promueva la agricultura y ganadería social y familiar.

La solución no pasa por el “blanqueo verde” que no revierte procesos de depredación del territorio y no suponen una alternativa de vida real y duradera para el medio rural ni para la despoblación. Además, seguimos apostando, desde nuestra experiencia en la defensa de los animales, por iniciativas en el ámbito de la protección animal, seres sintientes que en muchos casos son un miembro más de la familia. La aplicación de la Ley Estatal de Protección 7/2003 y sus reglamentos, es imprescindible, así como la adecuada dotación presupuestaria para el impulso de las nuevas obligaciones para las administraciones públicas.

El cambio climático afecta a todos los países, en todos los continentes. Tiene un impacto negativo en la economía y la vida de las personas y sus comunidades. Aragón puede tener una actividad económica más sostenible y respetuosa con el medio ambiente y un modelo centrado en el uso racional de nuestros recursos que prevenga y cuide de nuestra salud ante las amenazas, visibles y silenciosas o silenciadas, que nos rodean.

El Objetivo 13 de la Agenda 2030 exige medidas urgentes para combatir el cambio climático. Para abordarlo, los países adoptaron el Acuerdo de París, encaminado a limitar el incremento de la temperatura media mundial a un nivel inferior a los 2 °C. Queda mucho por hacer. Nuestra gente joven ha entendido que es un problema de primer orden y que quienes gobiernan no están respondiendo a esta emergencia, algo que también requiere la ciencia.

IUA impulsa un desarrollo económico, industrial, agrícola, ganadero y pesquero que tenga como eje fundamental la sostenibilidad, donde las actividades humanas se desarrollen con

pleno respeto al resto de la naturaleza, Debemos defender un territorio que proteja, conserve y restaure el medioambiente, los espacios protegidos y los que no lo están.

Para ello necesitamos una transición justa, planificada y diseñada desde las más radicales posiciones democráticas. El modelo industrial debe diseñarse contando con los recursos existentes, las necesidades sociales y la capacidad de carga, que nos fortalezca frente a las necesidades actuales y futuras y con capacidad de disminuir su huella ecológica.

Hablar de reconversión industrial da mucho miedo por los años de desmantelamiento de sectores enteros sin una alternativa, pero es necesaria para potenciar un modelo sostenible que pueda asegurar los servicios esenciales.

Es necesario un nuevo modelo de desarrollo turístico, desde la voz de la gente del territorio, que pase de ser detractor de recursos y contaminación a vincularlo a la cultura y la naturaleza, de bajo impacto y alto valor añadido: reorientar las actividades económicas para que sean sostenibles en el uso de los recursos naturales, promover energías renovables y proximidad en la generación, gestión de los materiales, producción limpia, agricultura ecológica, pesca responsable, consumo responsable y creación de empleo socialmente útil.

Creemos en el principio de precaución que garantiza que los procesos productivos, servicios e investigaciones se someten a controles que eviten la acción nociva sobre los seres vivos. Los recursos naturales son bienes universales y no pueden estar sujetos a sobreexplotación, a derechos de propiedad intelectual o a patentes.

IUA aboga por la planificación del desarrollo de las actividades en nuestras montañas y ríos en un modelo de desarrollo sostenible que tenga en cuenta los cambios del clima y las necesidades reales del territorio, y mejorar la estrategia aragonesa de protección de la biodiversidad y el paisaje como motor del futuro desarrollo de sus comarcas.

El impulso de la economía circular es clave para la producción y consumo: compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear valor añadido y alargar su ciclo de vida. Sensibilización, educación ambiental y participación son las herramientas para llegar a la ciudadanía.

El derecho a una movilidad sostenible para desplazamientos vitales requiere inversión y compromiso político y hoy no existe. Además de las capitales de provincia y cabeceras comarcales, con sistemas de transporte público mejorables que permiten cierta movilidad sostenible, hay muchas zonas menos pobladas que carecen de una movilidad eficaz que permita a la gente conectarse con su capital de provincia, lugar de estudio, trabajo u hospital de referencia. Hay que priorizar los medios de transporte públicos colectivos y electrificados, el uso del coche compartido y la gestión y mantenimiento públicos de la red viaria y apostar por los ejes ferroviarios con usos mixtos de pasajeros y mercancías.

La bicicleta sigue siendo una herramienta de movilidad sostenible de primer orden. Además de suponer un elemento de pacificación del tráfico rodado, es una alternativa barata y eficiente para los desplazamientos urbanos. La ciclogística es una vía de desarrollo económico que requiere de apoyo e impulso públicos, del mismo modo que el cicloturismo, que en el territorio aragonés está por explotar y supondría una vía de diversificación económica y de desestacionalización del turismo muy interesante.

El derecho humano al agua es, junto con el aire, el elemento más vital para la salud y supervivencia de los seres vivos, pero está amenazado al estar en el punto de mira del saqueo neoliberal. Se deben reconocer y garantizar los derechos al agua potable y al saneamiento y tenemos que blindarlos y evitar la fractura social con los sectores más vulnerables. Esto exige saltar de las medidas paliativas a normativas.

La política hidrológica debe gestionar la demanda del agua como un recurso natural cada vez más escaso, con una distribución de usos sostenible y fomento de la participación ciudadana, en coherencia con la Directiva Marco del Agua de la UE. Su incumplimiento en cuanto a depuración nos cuesta más de 22 millones de euros al año. De la misma forma es necesario superar la política hidrológica que no respondía a retos ambientales como el cambio climático para poner en el centro la sostenibilidad de los ecosistemas fluviales. La interrupción del curso de los ríos mediante grandes presas provoca impactos severos y ha provocado un importante gasto público y generado inseguridad a las poblaciones, como ha sucedido en los embalses de Mularroya, Yesa y Val, que han acabado por responder más a otros intereses y al modelo más industrializado que al modelo de agricultura social y familiar que siempre hemos defendido.

Un programa de inversiones en agua urbana tendría fuerte impacto en el empleo y en el medioambiente, ya que el 30% de nuestra red tiene más de 40 años y en las zonas rurales aún más, lo que provoca deficiencias en el servicio e ingentes pérdidas de este recurso. Se deben realizar obras de reparación y mejora de la red y programas para el fortalecimiento de la gestión. Sin mejora de la gestión, la mejora tecnológica tiene poco impacto. También el control directo en cuanto a titularidad y gestión pública de los centros de tratamiento de residuos y el control efectivo de los vertederos asociados a los mismos debe ser una prioridad de nuestras iniciativas políticas. El negocio que empresas privadas están haciendo de lo que es responsabilidad pública nos encamina, si no hay un giro radical, al incumplimiento de los compromisos medioambientales de la agenda 2030 y los objetivos comprometidos para 2050.

Asistimos a un empacho de anuncios inversores en Aragón para implantar grandes centros de datos promovidos por las tecnológicas mundiales, empresas energéticas y fondos de inversión, sin un análisis crítico. Las declaraciones de interés general son mecanismos extraordinarios que deberían estar muy justificados, pero nos encontramos con un instrumento que atiende a lo que ya respalda el mercado por sí solo.

En otros países y comunidades vecinas han rechazado o frenado estas instalaciones. Las preguntas son: cuál es consumo real de agua y en qué momento la van a demandar, qué prioridad tendrán en tiempos de sequía, qué impuestos van a pagar y cuáles no, cuál es el empleo real que van a generar -en los centros que ya funcionan la cifra ni se acerca a lo anunciado- y, sobre todo, qué compromisos y garantías han asumido las empresas a cambio de semejantes privilegios.

Conscientes de la crisis ecosocial, creemos que vivir bien es prioritario frente a ópticas catastrofistas. Hay que desarrollar la descentralización y democratización energética y es fundamental el papel que pueden jugar las comunidades autónomas.

La apreciación de las debilidades y dependencias de la cadena alimentaria en la pandemia debe servirnos para transformarla ante la mayor amenaza de la crisis climática: asegurar el

abastecimiento nutricionalmente correcto como derecho de toda la población en toda circunstancia, que contribuya a fijar población y que sea socialmente justa y ecológicamente compatible con la salud de las personas y de los ecosistemas. No podemos seguir buscando el máximo beneficio económico sin tener en cuentas los costes ambientales y sociales asociados: elevado consumo energético y de agua, 30% de las emisiones globales de los gases que contribuyen al cambio climático, deforestación y pérdida de la biodiversidad silvestre, cultivada y de los ecosistemas, pérdida de suelo fértil y riesgo de desertificación un -65% de superficie en España-, despilfarro de una tercera parte de alimentos, repercusión en la salud de las personas y en sus condiciones laborales.

En conclusión, creemos que merece la pena pelear por un mundo rural vivo.

#### 4.2.5. Educación, ciencia y tecnologías

IUA defiende un sistema público de enseñanza en todos los niveles educativos: educación infantil, primaria y secundaria, formación profesional, educación universitaria, la formación para el empleo o la formación continua.

Mantenemos un compromiso ineludible con la educación como derecho fundamental y cimiento básico social que contribuye a formar una ciudadanía más libre, crítica e igualitaria. Defendemos una educación pública universal, que sea gratuita, laica, inclusiva, solidaria, coeducativa, personalizada, participativa, ecológica, integral, intercultural y democrática.

Defendemos la educación pública por ser la única que garantiza igualdad de derechos y posibilidades para todos y todas, que promueve la participación democrática de los distintos sectores implicados en el proceso educativo, incluido el propio alumnado -también en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje-, y que respeta la libertad de conciencia y de creencias. Atiende a la diversidad y se compromete con el interés común al margen de intereses particulares ligados al adoctrinamiento ideológico o al negocio económico.

La escuela pública debe ser lugar de encuentro entre las personas que conviven en una sociedad cada vez más plural y multicultural, como premisa necesaria del auténtico desarrollo de la educación para la paz, en igualdad de géneros y respetuosa con la diversidad afectivo-sexual.

Debe ser gratuita y que, desde la primera infancia hasta la universidad, luche contra la lógica del mercado y priorice la rentabilidad social sobre la rentabilidad económica. Debe integrar los distintos ámbitos del saber, ayudar a la juventud a desarrollar su espíritu crítico y promover valores de paz, solidaridad y cooperación entre países y personas; desarrollar la libertad de pensamiento, la creatividad, la emancipación individual y la autorrealización, y ofrecer a toda la ciudadanía saberes fundamentales y la oportunidad de familiarizarse con las formas más elaboradas de un conocimiento cambiante que les ayude a desarrollarse como personas y a construir un mundo más justo y solidario.

Necesitamos un Sistema Público de Educación, de titularidad y gestión pública, como eje vertebrador y fundamental del sistema educativo, garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad, que asegure la convivencia democrática de personas con distintas procedencias socioculturales, y que contribuya a la equidad y la cohesión social. No compartimos que se destinen cada vez más fondos a una educación

concertada, mayoritariamente de corte religioso. que se convierte en factor de segregación escolar, con copagos ilegales que son un proceso de privatización encubierto. Creemos firmemente en el carácter subsidiario de la educación privada con respecto a la pública: el modelo de doble red ha sido señalado como el principal factor de segregación social en el sistema educativo español y es un factor clave en el avance de la desigualdad.

Los gobiernos de la derecha dismantelan el sistema público con el incremento de los concertados privados y su dotación, mercantilizando el derecho a la Educación. En las últimas décadas se ha aumentado la red concertada sin correspondencia con la evolución general del gasto educativo ni la inversión en la red pública. Es el efecto de decisiones políticas que apuestan por la escuela concertada. Frente a este hecho, la realidad demuestra que la escuela pública ofrece un mayor control, flexibilidad y eficacia para ofrecer educación universal de calidad y garantizar el derecho a la educación para todos.

Tenemos que dotar al sistema de enseñanza-aprendizaje de los recursos necesarios para desarrollarse en plenitud y apoyar al profesorado en su formación continua, con dotación suficiente de medios para el desarrollo de su labor, ajustando sus tiempos de trabajo y facilitando su reciclaje, recursos suficientes para desarrollar los currículos y la descarga de un trabajo administrativo que a veces ahoga los tiempos y el proceso educativo. Son esenciales todos los sistemas que complementan el proceso educativo para aprovechar toda la potencialidad del sistema público: comedores, actividades complementarias, relaciones e implicación en su entorno social.

Debemos potenciar y dotar de mejores infraestructuras al sistema público de FP, incluyendo la ampliación de plazas y ciclos, y defender y apoyar la universidad pública frente a algunos 'chiringuitos' privados disfrazados de universidades que con tanta diligencia e intensidad respaldan la derecha y ultraderecha. Hay que aplicar de manera eficiente en Aragón la normativa que endurece los requisitos para la creación y reconocimiento de nuevas universidades, y apoyar la extensión de la UZ en sus distintos campus con la dotación necesaria para garantizar su desarrollo y expansión, tanto territorial como científica.

Nos comprometemos en la defensa del sistema público de educación y su reforzamiento con inversiones, pero también a poner en valor sus indiscutibles valores democráticos de pluralidad, participación, inclusión y equidad, siendo conscientes de que es la forma de consolidar los avances sociales y democráticos que tanto nos ha costado alcanzar.

IUA considera imprescindible un incremento de la inversión en I+D+I, reforzando los campos de la investigación, la innovación y la formación permanente. El desarrollo científico ayudará a la creación de un tejido productivo de calidad, pero hay que regular un marco adecuado de relaciones entre el sector público y las empresas, y asentar el derecho a la carrera profesional evaluable para el conjunto de las funciones de investigación. Actualmente, hay una importante precariedad en la investigación que es preciso reducir, a lo que ayudará la conversión de las becas de investigación en contratos laborales. La I+D+I debe resolver necesidades sociales en línea con el respeto al medio ambiente.

El "Big data" y la inteligencia artificial, IA, van a acelerar la revolución tecnológica y su impacto. Los datos se han convertido en una fuente de poder del que la ciudadanía no es consciente. Es necesaria una reflexión sobre las herramientas digitales, su influencia y su uso en beneficio de la clase trabajadora. Estamos lejos de la soberanía digital, Aragón se ha

vendido a las grandes multinacionales y ha renunciado a impulsar tecnologías de código abierto o posibilitar la autonomía digital y el fomento de la colaboración comunitaria, la transparencia, la personalización y la innovación.

El debate que queremos abrir cuestiona en manos de quien está la tecnología, ya que, bajo otra lógica, los avances tecnológicos podrían potenciar el espíritu creativo, liberador y disfrutable, mientras que bajo la lógica capitalista esos avances sirven para la dominación y el control.

#### 4.2.6. Derechos sociales

Los derechos sociales atienden la vulnerabilidad en forma de pobreza, discapacidad, dependencia, discriminación o incluso agresión. Deberían posibilitar el empoderamiento de las personas y su desarrollo pleno, pero tienen un carácter muy asistencialista todavía y peor, aporofóbico, destinando muchos recursos al control y la criminalización de la pobreza.

Los derechos sociales están muy lejos de estar desarrollados plenamente en Aragón, con unos servicios muy precarizados en los que se ha apostado por la concertación, generando un doble sistema de servicios sociales.

A pesar de disponer de leyes y un catálogo muy completo de prestaciones para atender las necesidades sociales, la realidad es muy diferente. Los cuidados siguen siendo asumidos por las familias con pocos recursos públicos de apoyo por parte de la administración. En las prestaciones de la dependencia son mayoritarias las económicas, de menor coste y muy inferiores a la media española; las prestaciones sociales para la pobreza son miserables en cuantía y dirigidas sólo a la pobreza severa, ignorando la importancia de atender a las personas en riesgo de pobreza - que sigue creciendo, un 21% en 2024-; la valoración de la discapacidad que permite el acceso a derechos sigue muy por encima de los 6 meses máximo que establece la ley y aunque la atención a la discapacidad parece ser una prioridad, la ley de derechos y garantías sigue pendiente de desarrollo efectivo.

La atención a los menores, competencia propia de la comunidad, no responde a su interés superior. En el sistema de protección faltan personal y recursos para poder responder con calidad, pero se desmantela en lugar de reforzarlo. No se atienden bien las necesidades básicas de los tutelados y de los menores en riesgo. Además, la cobertura de la LOPIVI, la ley de protección contra la violencia a menores, tiene una escasa implantación en Aragón, sin recursos públicos especializados. Esa dejadez por parte del gobierno autonómico de atención con los menores, al final conduce a una marginalidad y a su exclusión social, creando las condiciones sociales para que germine el fascismo y sucedan hechos como los vividos este verano en distintos puntos del país.

La atención a mayores parece estar en el centro del debate con el desarrollo de la ley integral del mayor, pero se centra en cuestiones declarativas, sin recursos reales que respondan a necesidades que están sin cobertura como el maltrato o la soledad.

En Aragón tenemos leyes para superar la discriminación por orientación sexual o identidad de género, pero no se han desarrollado y no hay intención de hacerlo. Hay continuidad en la elaboración de planes para la gestión de la diversidad cultural, pero su aplicación es muy escasa y adolecen de una perspectiva antirracista. Lo más llamativo ha sido el recorte del

80% en cooperación al desarrollo de las administraciones gobernadas por la derecha, que atentan contra el tejido social solidario.

La población extranjera en Aragón representará en 2025 el 15,1% de la población total y va creciendo cada año. Se debe fomentar su participación social y política para confrontar juntas los discursos de odio que atentan contra la convivencia, que calan en los barrios y pueblos, y desarrollar políticas que permitan una inclusión real y el desarrollo de sus proyectos vitales, y que debe acompañarse en el ámbito estatal con un marco migratorio que garantice los derechos humanos.

Aragón cuenta con multitud de planes y estrategias que requieren de mayores recursos para ser efectivos y poder garantizar el acceso a recursos, pero las leyes se reducen a reglamentos restrictivos y no se desarrollan las herramientas pensadas para la evaluación y mejora de las políticas públicas.

Las comisiones interdepartamentales son más informativas que operativas, y sigue prevaleciendo la burocracia sobre los derechos de las personas, generando un maltrato institucional que revictimiza a las personas más vulnerables. Es fundamental, en este ámbito, mejorar la coordinación interadministrativa y aumentar el presupuesto destinado a este pilar del Estado de Bienestar que nunca se ha desarrollado con garantías.

---

## 5. La unidad como mirada imprescindible de la izquierda: experiencia y coherencia para impulsar el movimiento político y social

### 5.1. Construyendo un horizonte común

A lo largo de todo el documento hemos constatado la necesidad de trabajar con el máximo de actores posible para ir configurando esa masa crítica necesaria para una transformación de calado que garantice que todas salimos juntas, de manera justa y desde abajo, de la crisis ecosocial en la que estamos inmersas.

La alternativa es un frente reaccionario y retrógrado que intenta hegemonizar un marco mental de miedo, odio, exclusión a nivel global, y un marco material que asegure a la clase ultra rica el acceso a recursos cada vez más escasos y la bunkerización de sus privilegios mediante una salida ecofascista que dejará más tasas de desigualdad, pobreza, catástrofes climáticas y aumento de la represión y los conflictos a lo largo y ancho del mundo.

A esta peligrosa deriva contribuye el debilitamiento de la confianza en las instituciones y en la democracia, que está poniendo en jaque consensos y derechos que equivocadamente se daban por sentados y por los que esta organización ha mantenido la lucha a lo largo de los años. Así, las alianzas sociales y políticas cobran importancia fundamental para hacer de la

necesidad virtud y convertir este riesgo de involución en una oportunidad para superar el marco capitalista y no conformarnos con meras reformas o con volver a la “normalidad”.

El ciclo de procesos de confluencias ha ido caminando con muchas dificultades, altibajos y en general ha supuesto un gran desgaste para el conjunto de la izquierda y también para la ciudadanía, que no vive en profundidad los procesos y ve cómo fuerzas políticas y sociales con objetivos similares no encuentran caminos solventes para la unidad.

Transformar la frustración y el desconcierto en ilusión y esperanza, puede significar la diferencia entre la pasividad y la inacción o un paso más en el compromiso colectivo. Para crear mejores vínculos con este proyecto de transformación social es importante dar certidumbre en el plano emocional además de en el material. También las relaciones entre las diversas organizaciones deben pivotar sobre los cuidados para ser espacios amables, sanos y sólidos desde donde poder trabajar con eficacia.

Nuestra organización se ha dejado la piel, visibilidad, recursos y representación institucional en la construcción de espacios de unidad sobre bases programáticas y criterios que pudieran garantizar un funcionamiento democrático y respetuoso entre todas las organizaciones. En Aragón nuestra militancia ha impulsado y vertebrado coaliciones con distintas nomenclaturas, sacrificando nuestra visibilidad en multitud de procesos municipales, confeccionados prácticamente ad hoc, para facilitar el trabajo de acción política y ser más útiles a la mayoría social. En el ámbito autonómico, el trabajo ha sido intenso, no llegando a cuajar por lo complejo de las distintas coyunturas y actores en juego.

En estos años hemos adquirido experiencia en los procesos de construcción de espacios de unidad, con sus aciertos y errores, de los que debemos aprender. Por eso un mandato de la

XIII Asamblea Federal fue la realización de un debate que cristalizó en un proceso monográfico sobre alianzas en las distintas federaciones.

En Aragón lo desarrollamos con mucho mimo, recogiendo análisis y propuestas en las asambleas de base y debatiendo importantes enmiendas que se recogieron, en buena parte, en el documento final. Nuestra vocación de un frente amplio de la izquierda social y política, radicalmente democrático y centrado en la intervención en el conflicto a partir de una sólida base programática, pero sin obviar la realidad de años de desgaste, de poca o nula voluntad de determinadas organizaciones de funcionar con garantías democráticas y la evidencia de que al final se conforman espacios de unidad electoral coyunturales.

Hay que partir del análisis de la realidad, no cometer errores pasados y exigir mínimos programáticos, recursos, visibilidad y mecanismos de control para un funcionamiento transparente y democrático de los espacios, con tiempo adecuado para las negociaciones y siempre alineados con nuestros objetivos como organización política y social. Las futuras coaliciones en las que participemos deben garantizar la autonomía y la visibilidad de las organizaciones que las conforman para garantizar el éxito de estas.

Fortalecernos como organización es esencial porque, como vemos en nuestro territorio, somos las que sostenemos estos espacios y les damos capacidad de organización y acción política concreta, tanto a pie de calle como en las instituciones, y porque debemos estar en

las mejores condiciones de afrontar procesos electorales en solitario y garantizar nuestra presencia cuando la unidad no es posible.

El proceso federal de Convocatoria por la Democracia debe servir para estos fines y sobre todo para seguir haciendo lo que hemos hecho siempre, seguir trabajando con las organizaciones políticas, sociales, plataformas, sindicatos y cualquier movimiento en lucha.

## 5.2. Orgullo de militancia e identidad: Izquierda Unida de Aragón

El orgullo nunca es individual, siempre es el fruto del trabajo colectivo. Eso lo sabemos bien en IU.

Nos definimos por ser un movimiento político y social. Es decir, que ser afiliada a IU Aragón implica mucho más que ser miembro de un partido. Venimos de una tradición de militancia que enraíza con el hilo rojo de la historia, pero también con una visión de cómo queremos que sean nuestro presente y futuro.

Nos caracterizamos por la participación activa en los movimientos sociales de nuestro territorio. Tanto la política institucional como la movilización social son herramientas de transformación necesarias en las que como militantes tenemos mucho que aportar: desde la presencia capilar en todo Aragón como militantes de base a la coordinación del movimiento social con la actividad institucional para hacer de correa de transmisión.

Del mismo modo, en nuestro ADN está el trabajo por lograr la conquista de derechos y la justicia social mediante la unidad popular y el trabajo común de la clase trabajadora. En dicha convergencia o confluencia tenemos bagaje y experiencia, ya sea en las calles o en las instituciones. Pero consideramos que nuestra participación en espacios más amplios debe pasar necesariamente por ese reflejo del orgullo de militancia e identidad de IUA puesto que, en unas circunstancias tan cambiantes, somos un valor de fiabilidad y estabilidad. IUA es diversa pero también previsible, con una hoja de ruta con vocación de izquierda transformadora.

En un contexto mundial de crecimiento de los movimientos más reaccionarios, tenemos la responsabilidad y el deber de sacar pecho de nuestro bagaje e historia, así como de señalar el rumbo hacia horizontes sostenibles y de progreso humano.

Mostrar que un mundo más justo es posible pasa por creérselo nosotras y nosotros también y de tratar de avanzar hacia el mismo mediante la praxis cotidiana. IU Aragón es un espacio político abierto, diverso, trabajador y organizado para todas aquellas personas que no se conformen con las migajas de la democracia. No solo sabemos defendernos de los ataques del capitalismo y la ultraderecha, también tenemos una propuesta política desde la izquierda transformadora y queremos contar con el mayor número de personas comprometidas en ponerla en marcha.

---

## 6. Nuestra organización como raíz y fuerza de la izquierda en Aragón

A lo largo del documento hemos ido desgranando el análisis de la situación y las alternativas que planteamos para conseguir la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora y de los más vulnerables. En definitiva, para seguir siendo ese referente necesario de la izquierda que ya tiene experiencia, visión, propuestas, credibilidad etc. Pero esto no se puede lograr sin Organización. Cuando hablamos de Organización lo hacemos desde dos vertientes, las personas que la conforman y las formas de relacionarnos, debatir, tomar decisiones y ponerlas en práctica.

### 6.1 La afiliación, activo de Izquierda Unida de Aragón

El mayor activo que tiene Izquierda Unida de Aragón es su militancia. Como hemos visto en otras ocasiones cualquier organización, partido, colectivo que no dispone de una militancia sólida ante las dificultades se disuelve como un azúcarillo. Solo las organizaciones que disponen de una militancia convencida y comprometida con lo que hace es capaz de enfrentarse a situaciones complicadas como las que nos acechan en estos momentos. Así es la militancia de Izquierda Unida de Aragón, luchadora, combativa, activa, crítica, con ganas de participar, debatir y trabajar por una sociedad más justa, e igualitaria.

Para llevar a cabo las tareas que nos planteamos necesitamos crecer como organización y uno de los objetivos en materia de organización de la nueva Dirección debe ser este. Para crecer hay que trabajar en tres frentes.

En primer lugar, está la militancia actual a la que hay que dotar de información, y de espacios en los que puede debatir, juntarse, formarse etc. El objetivo es que no solo no perdamos militantes, sino que los que tenemos se reactiven e ilusionen en este nuevo periodo. Eso solo lo podremos conseguir si les damos elementos de participación y debate en la organización.

En un segundo lugar están esas personas que en algún momento han sido militantes a las que hay que intentar recuperar, o han sido o son simpatizantes a las que hay que animar a que den el paso de la afiliación.

En tercer lugar, debemos atraer a gente nueva al proyecto de IU. Aunque la mejor campaña de afiliación es nuestro trabajo diario, nuestra implicación en las luchas y los conflictos, debemos diseñar una campaña de afiliación que además profundice en acercarnos a colectivos que en estos momentos no ven a IU como un referente al que unirse y que entendemos son relevantes en nuestro proyecto político como la juventud y la población migrante, colectivos a los que la izquierda social organizada no está siendo capaz de llegar y que exige estar abiertas a cambios también en las dinámicas organizativas y comunicativas.

## 6.2 Asambleas territoriales y de base

Las asambleas de base y las asambleas territoriales son el sostén básico de la organización y las que vertebran la militancia a lo largo y ancho de Aragón. Son espacios genuinos de debate, participación, acogida y atención a los problemas de la gente que puebla nuestros barrios, pueblos y ciudades. No solo son las que más conocen las realidades a pie de territorio sino que también son las que comprenden mejor las consecuencias que se derivan para la vida de la gente de la aplicación de las políticas de carácter más general.

Es necesario que sus análisis y propuestas tengan un peso específico en la acción política de la organización y para eso la comunicación ha de ser transparente, fluida y bien coordinada con los órganos de la dirección, no solo para el planteamiento de sus propuestas y elaboración política sino también como vehículo de expresión y concreción de los planes de trabajo de los órganos de dirección.

La coordinación institucional entre las personas de estas asambleas que ejercen cargos públicos y los grupos institucionales en todos los niveles tiene que ser eficaz y servir para tejer redes de asambleas que multipliquen la acción política y sigan siendo el ejemplo más cercano -y mejor- que tiene la ciudadanía en nuestros pueblos y ciudades de lo que es la política íntegra, honesta y útil.

A través de su funcionamiento se incide en la construcción de poder popular con la participación y, en muchas ocasiones, el impulso y la vertebración, de movimientos vecinales, plataformas, organizaciones sociales y todo tipo de espacios de participación en la vida comunitaria. En cuanto a su función de tejido de alianzas, su rol es esencial para la construcción de la unidad en las fórmulas más adecuadas y útiles para los objetivos comunes.

## 6.3 Las redes como espacios sectoriales de trabajo político y social en común

Las redes se configuran como espacios abiertos y amplios de trabajo sectorial en común, que nos permiten tanto alianzas fértiles como mejoras en la elaboración política al incorporar visiones, conocimiento, metodología y enfoques diversos.

Por su propia naturaleza deben ser dinámicas y adaptarse a las necesidades o coyunturas concretas, pero sin perder de vista los objetivos y el carácter estratégico de su tarea. En este tiempo se ha procurado que sean útiles y productivas, y algunas veces es difícil en tiempos de desafección y cansancio, pero debemos seguir replanteando, mejorando e impulsando su funcionamiento para que cumplan esa función imprescindible de elaboración y trabajo en común.

Mujer y feminismo, medio ambiente, economía, sanidad, educación, derechos sociales... son muy importantes para la acción política tanto a pie de calle como institucional y para dotar a las movilizaciones y las luchas de una sinergia que no puede aprovecharse si nos aislamos en nuestras propias organizaciones.

La comisión colegiada, a través de las responsabilidades de coordinación general, organización y movilización, coordinará el trabajo de las redes para que su trabajo pueda ser eficaz y trasladarse a la acción política, social e institucional de toda la organización, buscando la presencia y participación de todo el territorio en ellas de forma que mejore la coordinación y el desarrollo de la acción política. Además, es importante mantener una relación fluida y coordinada con las redes de la organización federal para aprovechar y canalizar el trabajo que se genera en estos espacios.

## 6.4 Nuestros órganos de dirección colectiva

### 6.4.1 Coordinadora de Aragón

La coordinadora de IU Aragón continuará con la estructura acordada en la XII Asamblea en lo referente a la participación de territorios, partidos políticos integrantes de IU, corrientes reconocidas y miembros elegidos en asamblea. El número de las personas integrantes que la conformen será determinado por el reglamento de la presente asamblea.

Se reunirá al menos cada 90 días, y sus funciones son, entre otras: organizar y convocar la Asamblea de Aragón; elegir en su primera reunión a la persona propuesta por los miembros de la Coordinadora elegidos en la Asamblea para desempeñar la Coordinación General; ostentar las funciones de representación legal y política de IUA, sin menoscabo de las funciones que pueda tener la figura de la Coordinación General; dirigir el trabajo político de IUA mediante la elaboración de Planes de trabajo anuales; coordinar la elaboración programática y el curso de la política de unidad y alianzas; garantizar la unidad de acción política y programática en el conjunto de Aragón; ratificar la propuesta de Comisión Colegiada que realice la persona que ostente la Coordinación General; aprobar las coaliciones electorales; desarrollar, controlar y evaluar los acuerdos post electorales; dirigir la política aragonesa y adoptar las resoluciones necesarias con carácter vinculante.

### 6.4.2 Comisión colegiada

En línea con el trabajo desarrollado estos años, la comisión colegiada debe guiar el análisis, la propuesta y la acción política en torno a los ejes básicos de feminismo, lucha contra las desigualdades, cultura de paz y sostenibilidad para encaminar una salida justa, democrática y común a la crisis ecosocial.

Para ello, la asignación de responsabilidades y tareas debe ajustarse a los retos que tenemos que afrontar y a la vez ser flexible con las distintas coyunturas, y debemos seguir haciéndolo a través de un liderazgo colectivo que sume la energía y la inteligencia de toda la militancia con una buena coordinación territorial e institucional y un flujo dinámico de información que nos permita tomar decisiones con el máximo de perspectivas posible.

Hay que continuar el trabajo de extensión y refuerzo organizativo para volcarnos con fuerza en la movilización y la construcción de poder popular junto con el resto de la sociedad civil organizada. Para ello no sólo es esencial la labor de organización y de movilización, también lo es cómo comunicamos a las demás compañeras de camino y a la mayoría social nuestra propuesta, nuestros valores y nuestra manera de entender la política y la vida.

La incorporación, con voz pero sin voto, de las cuatro coordinaciones de territorio a este órgano ha supuesto poder mejorar la toma de decisiones al incorporar la visión territorial y facilitar la coordinación en la acción política y la comunicación entre órganos y militancia, por lo que seguiremos en esta línea, incorporando las mejoras que sean necesarias.

De la misma manera, se procurará distribuir las responsabilidades de trabajo de acuerdo a los órganos de dirección de la estructura federal, cuando sea posible, para facilitar la coordinación con el conjunto de la organización.

## 6.5 Participación, debate y formación

Además de los espacios de debate abierto en las asambleas, hay que impulsar la participación de la ciudadanía a través de charlas, jornadas formativas, foros de debate monográficos, mesas informativas, acciones culturales o cualquier canal que pueda servir para fomentar el espíritu crítico y la implicación de la gente en la política entendida de manera radical, es decir, la participación en la toma de decisiones de los asuntos comunes.

Es imprescindible también la formación constante para nuestra militancia, simpatizantes y abierta a cualquier persona interesada tanto en temas de política general como adecuada a las necesidades de nuestras asambleas o al interés de la ciudadanía en temas concretos.

Es esencial el intenso trabajo de la Fundación 14 de abril tanto en el ámbito de la memoria democrática como en la generación de espacios de cultura y reflexión compartida, imprescindible en estos momentos en que dar la batalla cultural y por el relato es una lucha importante contra el creciente discurso fascista.

## 6.6 La comunicación

Si algo caracteriza a nuestros cargos públicos, dirigentes, asambleas y redes es la capacidad de trabajo y el elevado número de propuestas e iniciativas que plantean. Es por ello que la labor de comunicación es estratégica y debe ser eficiente.

Nuestra actividad política se viene desarrollando siempre comunicándose en una doble dirección: hacia dentro de la organización y hacia fuera. Tan importante es que nuestra militancia esté al día de nuestra actividad y que se implique en la difusión de la misma en su entorno más cercano como la difusión hacia la opinión pública y la sociedad aragonesa en general.

En cuanto a la comunicación interna, además de mantener a la militancia al día de los acuerdos que tome la organización, es esencial la elaboración de una publicación propia, a modo de boletín digital, que haga llegar de primera mano a militantes y simpatizantes una selección de la actividad más destacada de la organización, tanto en la calle como en la institución.

Es primordial que nuestra militancia, que es nuestro mayor altavoz exterior, sepa lo que hacemos para que puedan trasladarlo a la sociedad y por eso es importante que los informes aprobados sean enviados a la militancia en la mayor brevedad posible y se

encuentren vías ágiles de comunicación. Es la mejor forma para que todo el trabajo que realiza la organización sea conocido en los barrios, en los tajos, etc.

Respecto a la comunicación externa, el desarrollo tecnológico nos obliga a explorar nuevos canales y formatos que hagan llegar mejor nuestro mensaje de justicia social, reparto de la riqueza y respeto a la naturaleza y el territorio. Siempre ha sido difícil situar el mensaje anticapitalista y de izquierdas en el panorama de los medios de comunicación convencionales, es por ello que, sin abandonar ningún frente, debemos abordarlos todos (redes sociales, medios comunitarios, medios convencionales, cartelería clásica, etc.).

En este sentido, el papel del equipo de comunicación es esencial en la relación con los medios, en la elaboración de materiales audiovisuales para redes sociales y en la organización de actos políticos.

## 6.7 Gestión económica y financiera

El buen trabajo realizado estos últimos años nos permiten contar con unas cuentas saneadas que sostienen las necesidades de funcionamiento de la organización y nos permiten concretar nuestra acción política.

Continuaremos con esta buena gestión, que ajusta posibilidades con necesidades y que se realiza con total transparencia y rigor, y que también se concreta en la corresponsabilidad económica de los cargos públicos y las personas que trabajan en los grupos institucionales.